

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

48ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION EXTRAORDINARIA —
DICIEMBRE 9 DE 1992

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri
y Mario Carlos Brook

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno
y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Germán Darío
ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ACEVEDO, Julio César
ACHEM, Antonio
AGUADO, Jorge Rubén
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ALABI, Ernesto Salim
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ÁLVAREZ, Carlos Alberto
ÁLVAREZ, Héctor Claudio
ÁLVAREZ ECHAGUE, Raúl Angel
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando Miguel
AMADEO, Eduardo Pablo
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Juan Carlos
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BARBERÁ, Eliseo
BASSANI, Angel Marcelo
BAUM, Daniel
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BELTRAN, Carlos Roberto
BERICUA, Jorge
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BISCHOF, Enrique Alberto
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BROOK, Mario Carlos
BRUNATI, Luis Pedro
BRUZZO, Omar Obdulio
CABRERA, Gerardo Angel
CAFIERO, Juan Pablo

CAIMMI, Fernando Enrique
CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMAÑO, Dante Alberto
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMAÑO, Graciela
CANATA, José Domingo
CAPUTO, Dante Mario
CARRERAS, Porfirio Mario
CASTILLO, José Luis
CAVALLARI, Juan José
CEBALLOS, Walter Alberto
CLERICI, Federico
CICARE, Miguel Angel¹
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás
CRAMARO, Hugo Arnaldo
CROSTELLI, Juan Carlos
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DE MARTINO, Víctor Amador
DURRIEU, Marcela Margarita
ECHEVARRÍA, Luis María
ELÍAS, Angel Mario
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FAJARDO, Juan Carlos 2
FALLETI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ, GILL, Guillermo Carlos
FERREYRA, Eduardo Marie
FESCINA, Andrés Julián
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FONTELA, Moisés Eduardo
FRIGERIO, Octavio Oscar
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GAN, Fernando Pascual
GARCÍA, Pedro Alberto
GARCÍA CUERVA, Ignacio Santiago
GATTI, Héctor Angel
GAUNA, Juan Octavio
GERMANÓ, Alberto Raúl
GOLPE, Néstor Lino

GÓMEZ, Roque Julio César
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos Enrique
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Luis Mario
GONZÁLEZ GASS, Gabriela M.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Antonio Isaacs
GUERRERO, Luis Serafín
GUZMÁN, María Cristina
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNÁNDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA, Luis Fernando
HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRECHE, Julio César
IRIBARNE, Alberto Juan Bautista
ITURRE, César Eusebio del Valle
KOTH, Carlos
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando Justo
LOSADA, Luis Enrique
LOUTAF, Julio César
LYNCH, Carlos Alberto
MACHADO, Oscar Alfredo
MAGGI, Juan Alberto
MANFREDOTTI, Carlos
MANNY, José Juan
MARCÓ, Jorge Raúl
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARELLI, Mabel G. de
MARTÍN de DE NARDO, María
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEGHINI, Javier Reynaldo
MICHELLI, Marco Aurelio
MOLARDO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MONTEVERDE, Carlos Roberto

MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
 MOURE, Juan Manuel
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NATALE, Alberto Adolfo
 NIKISCH, Hugo Víctor
 NIÑO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Ángel
 PARADA, Alberto
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PAROLA, José María
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Aníbal Pedro
 PESCE, Félix
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PIOTTI, Alberto Daniel
 PRAT, Alfredo Ernesto
 PROFILI, Gerardo Pedro
 PRONE, Alberto Josué
 QUEZADA, Rodolfo Héctor
 RÍ, Ricardo Horacio
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ, Raúl Eduardo
 RODRÍGUEZ SANUDO, Hugo B.
 ROIG, Angel
 ROY, Irma
 RUCKAUF, Carlos Federico
 RUIZ, Angel Rafael
 SABIO, Juan Carlos
 SACKS, Rubén Rodolfo
 SALUSO, Horacio Ramón
 SALVADOR, Daniel Marcelo
 SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
 SANTÍN, Eduardo
 SCELZI, Carlos José
 SEGUÍ, Héctor Miguel
 SODERO NIEVAS, Víctor Hugo
 SOLA, Felipe Carlos
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Conrado Hugo
 SUCARIA, Neyef
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 SUREDA, Ángela Gerónima
 TACTA de ROMERO, Emma Andrea

TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TROYANO, Silvia Elena
 URIONDO, Luis Enrique Ramón
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VARELA, Néstor Ángel
 VÁZQUEZ, Ricardo Héctor
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VERDÚ, Mario
 ZAMBIANCHI, Carlos
 ZAMORA, Federico
 ZAMORA, Luis Fernando

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BARBOTTI, Atilio Ector
 BLANCO, Oscar Alberto
 DURANONA y VEDIA, Francisco de
 ROMERO, Humberto Antonio

AUSENTES, CON LICENCIA:

BORDÍN CAROSIO, Hugo Antonio
 FLORES, Rafael Horacio
 GONZÁLEZ, Oscar Félix
 PINTO, Guillermo

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ADAIME, Felipe Teófilo
 ARIAS, César
 BERMÚDEZ, María del Pilar
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CRUZ, Washington Jesús
 FERRADAS, Miguel Enrique
 GARCÍA de NOVELLI, María Cristina
 GIOJA, José Luis
 GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás Walther
 LÓPEZ, Alcides Humberto

MAQUEDA, Juan Carlos
 NACUL, Miguel Camel
 SAADI, Ramón Eduardo
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCH, José María
 VICCHI, Raúl Horacio
 ZARACHO, Evelio Argentino
 ZAVALA, Gilberto A.

AUSENTES, CON AVISO:

ALENDE, Oscar Eduardo
 AVELÍN, Alfredo
 BALESTRINI, Miguel Alberto
 BENEDETTI, Jorge Enrique
 BERTHONGARAY, Antonio Tomás
 BREARD, Noel Eugenio
 CASARI de ALARCIA, María Leonor
 D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
 DE LA RUA, Fernando
 DI TULLIO, Héctor Horacio
 DUSSOL, Ramón Adolfo
 ESPECHE, Alberto Luis
 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
 FERNÁNDEZ, Roberto Enrique
 GARAY, Nicolás Alfredo
 GÓMEZ, José Ernesto
 HARDY, Aníbal Osvaldo
 IGLESIAS, Evaristo Constantino
 JALIL, Luis Julián
 LECONTE, Ricardo Guillermo
 MACHICOTE, Jorge Raúl
 MARCOLLI, Juan Miguel Ángel
 MARTÍNEZ, Luis Alberto
 MICHITE, Salomón Antonio
 ORQUÍN, Leopoldo Manuel
 PARRILLI, Oscar Isidro José
 PICCININI, Ana Ida
 PURICELLI, Arturo Antonio
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 ROMERO, Carlos Alberto
 SAADI, Luis Alberto
 SAMID, Manuel Julio
 TOTO, Francisco Patricio
 VARELA CID, Eduardo
 VÁZQUEZ, Roberto
 YOMA, Jorge Raúl

1 Incorporado en la presente sesión en reemplazo del ex señor diputado Jorge Alberto Rodríguez (renunció el 4/12/92).

2 Incorporado en la presente sesión en reemplazo del ex señor diputado Jorge Antonio López (renunció el 20/11/92).

—La referencia acerca del distrito, bloque y periodo del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª reunión (Sesión preparatoria), de fecha 30 de abril de 1992.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 6287.)
2. Juramento e incorporación del señor diputado electo por el distrito electoral de Mendoza, don Juan Carlos Fajardo. (Pág. 6288.)
3. Consideración de la renuncia a su banca presentada por el señor diputado por el distrito electoral de La Pampa, don Jorge Alberto Rodríguez. (Pág. 6288.)
4. Juramento e incorporación del señor diputado electo por el distrito electoral de La Pampa, don Miguel Ángel Cicare. (Pág. 6289.)
5. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Galván con motivo de un incidente protago-

nizado por un agente de la Policía Federal (4.456-D-92). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 6290.)

6. Continúa la consideración del proyecto de ley de los señores diputados Corchuelo Blasco y Barbeito (m. c.) sobre implantación de órganos y materiales anatómicos (3.457-D-91). (Pág. 6290.)
7. Indicación del señor diputado Quezada de que la Presidencia de la Honorable Cámara se dirija al Honorable Senado de la Nación a efectos de que proceda a designar a los integrantes de las comisiones bicamerales encargadas de analizar los antecedentes de los representantes en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y en el Ente Nacional del Gas. (Pág. 6295.)

8. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 6296.)

9. Apéndice:

A. Asuntos entrados:

— Comunicaciones de señores diputados. (Página 6320.)

— En Buenos Aires, a los nueve días del mes de diciembre de 1992, a la hora 16 y 59:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia informa que hay 140 señores diputados en la casa. No habiendo quórum, por Secretaría se pasará lista; en caso de que no se reúna el número reglamentario, la Cámara proseguirá en cuarto intermedio hasta la semana próxima.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: habida cuenta de la información que usted nos ha suministrado en cuanto a la cantidad de señores diputados que hay en la casa, nuestro bloque sugiere que esperemos 10 minutos a fin de lograr que concurran al recinto los legisladores que se supone están en este Congreso. Solicitamos que los demás bloques adopten una actitud similar dado que el tema que hoy nos convoca —el proyecto de ley sobre ablación e implante de órganos— es de suma importancia.

Sr. Galván. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al señor diputado por La Rioja que la sesión aún no ha tenido inicio.

Sr. Galván. — Tengo entendido que esta reunión es la continuación de un cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Pierri). — Así es, señor diputado, pero todavía no se ha iniciado la sesión. En caso de que ello ocurra, con mucho gusto le concederé el uso de la palabra. Por otro lado, la Presidencia informa a la Cámara que una vez conformado el quórum el cuerpo debe tomar juramento a dos señores diputados.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para una aclaración

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Solicito a la Presidencia que me asesore en torno de la siguiente cuestión.

Según tengo entendido, en la sesión anterior la Cámara pasó a cuarto intermedio luego de haber aprobado en general el proyecto de ley sobre ablación e implante de órganos; en consecuencia, deberíamos iniciar su tratamiento en particular. Esto significa que el cuerpo no requiere la conformación de quórum...

Sr. Presidente (Pierri). — Si me permite, señor diputado, deseo aclararle que, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría, la Cámara debería reiniciar la sesión con una votación.

Sr. Matzkin. — Siendo así, sugiero a la Presidencia y a los miembros de las comisiones especializadas la posibilidad de avanzar en el tratamiento de aquellos artículos que merezcan consideraciones. Si hubiere asentimiento de la Cámara en este sentido, luego —una vez reunido el quórum— podríamos realizar la votación. Entiendo que mi sugerencia constituye una forma de agilizar la reunión mientras trabajamos en la búsqueda del quórum.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: como ya se ha votado en general, la Cámara está en condiciones de empezar la consideración en particular del artículo 1º, sin perjuicio de lo expresado por el señor diputado Matzkin.

Sr. Presidente (Pierri). — Lo que ocurre es que no hay ningún señor diputado anotado para hacer uso de la palabra en el artículo 1º, por lo que corresponde votarlo directamente.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: si no entendí mal, todo depende de que haya o no anotados para hacer uso de la palabra en el artículo 1º, pero hasta donde tengo entendido aún no hemos tenido oportunidad de anotarnos.

Sr. Presidente (Pierri). — En la lista que está en poder de la Presidencia no hay ningún señor diputado anotado para hacer uso de la palabra en la consideración del artículo 1º.

Sr. López de Zavalía. — Pensé que se iba a seguir el procedimiento de otras sesiones, donde la Presidencia ha puesto en consideración una norma por títulos, con el solo asentimiento de la Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Invito al señor diputado electo por el distrito de La Pampa a prestar juramento.

—Requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, el señor diputado don Miguel Angel Cicare jura según la fórmula del inciso 2º, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

5

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Galván. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: voy a distraer brevemente la atención de la Honorable Cámara a raíz de un hecho en el que me ha tocado participar y que me veo en la obligación de denunciar aquí para preservar los privilegios del cuerpo.

Hace apenas unos minutos me dirigía desde el aeroparque al Congreso en un taxi después de vencer las peripecias que últimamente se han puesto de moda en los vuelos de Aerolíneas Argentinas —debía arribar a las 11 horas, pero llegó a las 16—, cuando fue interrumpido mi trayecto por un agente de la Policía Federal en la intersección de la Avenida de Mayo con la calle Lima.

A pesar de haberme identificado y de descender del vehículo para pedirle al señor representante de la autoridad policial que me franqueara el paso porque debía llegar al Congreso para participar de la sesión no sólo empleó un tono desconsiderado sino que, ante el avance del taxi por unos pocos metros, este agente, identificado con la chapa número 1184, echó mano al cinto con la clara intención de tomar el arma reglamentaria.

No se trata de una cuestión episódica, señor presidente. Siento un profundo respeto por la autoridad policial. Lo más grave de todo esto es que preguntó a qué partido pertenecía quien habla, porque aparentemente según cuál fuera la divisa partidaria era más fácil o no el acceso a la deliberación a la que ahora estamos abocados.

Este cabo de la Policía Federal, chapa 1184, me dijo que recibía órdenes del señor ministro del Interior. No creo que haya sido así, pero aprovecho esta oportunidad para abogar por el respeto de los fueros parlamentarios y recomen-

dar al señor ministro que sosiegue a la Policía Federal. El día en que los diputados permitamos —con la complicidad de algunos— que un agente de policía impida el paso de los representantes del pueblo a las deliberaciones, esta Cámara quedará a merced del señor presidente de la República.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Galván. — Más allá de las situaciones curiosas que han movido a risa a algunos colegas, considero que esta cuestión de privilegio no puede ser demorada, porque de lo contrario se irán acumulando las irregularidades y, cuando nos descuidemos, el Poder Ejecutivo tendrá tal fuerza que podrá impedir el normal funcionamiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

No planteo esta cuestión de privilegio en defensa de la humilde persona del diputado Raúl Galván, de la provincia de La Rioja, sino en defensa de este cuerpo, que debe tener autonomía suficiente para deliberar en cualquier circunstancia y frente a cualquier actitud arrogante.

Finalmente, solicito que esta cuestión de privilegio sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que oportunamente la Cámara haga conocer al señor ministro del Interior el suceso que acaba de ocupar la atención de todos ustedes. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Atento a lo solicitado por el señor diputado por La Rioja se va a votar si la cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en consecuencia.

6

IMPLANTACION DE ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar en particular el artículo 1º del proyecto de ley consensuado por las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General sobre trasplantes de órganos y material anatómico¹.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

¹ Véase el texto del proyecto de ley en el Diario de Sesiones del 3 de diciembre de 1992, página 5915.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: para ahorrar tiempo en el debate pasaré por alto mis observaciones sobre el artículo 1º, no obstante contener algunas faltas contra la elegancia y el tecnicismo. Dado que dichas irregularidades no se vinculan con la cuestión de fondo, prefiero concentrar la atención en el artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño. — Señor presidente: solicito que la consideración en particular, así como también las votaciones correspondientes, se hagan por títulos y no por artículos.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se procederá en la forma indicada por la señora diputada por Buenos Aires.

—Asentimiento.

Sra. Camaño. — Asimismo, solicito que se arbitren los medios necesarios a fin de que los señores legisladores no se retiren del recinto para poder votar sin inconvenientes.

Sr. Presidente (Pierri). — Eso es lo que también solicita la Presidencia, señora diputada.

Teniendo en cuenta el asentimiento brindado por la Honorable Cámara a la solicitud de la señora diputada por Buenos Aires, corresponde considerar el título I del proyecto aprobado en general, que comprende los artículos 1º y 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: el éxito futuro de la ley depende de la redacción que demos a este artículo 2º, por lo cual confío en expresarme con la suficiente claridad como para llevar la convicción a ambas comisiones de que debe introducirse una modificación.

Este artículo entra en combinación con otros del proyecto y de esa manera se construye la norma jurídica básica de todo el sistema. Podemos concebirlo con la conocida formulación disyuntiva del siguiente modo: "dado A puede ser B" y "dado no B, debe ser S". En esa formulación disyuntiva apreciamos lo que los lógicos deónticos denominan la endonorma y la perinorma.

Como bien saben ustedes, la perinorma "dado no B, debe ser S", está representada por la sanción prevista, que ahora se diversifica en sanciones civiles, administrativas y penales. Ello quiere significar que la construcción de la endonorma es fundamental y se encuentra expresada en este artículo 2º en la fórmula "dado A, podrá ser B", en tanto A constituye el supuesto de hecho —operative fact, Tatbestand, fattispecie— de la norma, que pone en movimiento todo el sistema. **Advertirán ustedes que no es lo mismo que un**

determinado dato figure en la consecuencia jurídica a que esté en el supuesto de hecho.

Comparando la formulación del proyecto con la que presenta la ley actual, advierto una diferencia sustancial. Lo que en la ley actual aparece como una consecuencia jurídica, en la iniciativa en consideración constituye un supuesto de hecho.

En la normativa vigente, a partir de que se hayan agotado los medios existentes o resulten insuficientes, surge la consecuencia doble de la posibilidad de ablación e implante y de que estas prácticas se consideren de técnica corriente y no experimental. En cambio, en el proyecto el concepto de técnica corriente y no experimental no figura en la consecuencia jurídica, sino que se traslada al supuesto de hecho, ya que entre los requisitos para la ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos se incluye el siguiente: "... y siempre que estas prácticas sean de técnica corriente y no experimental". Es decir, que estas prácticas quedan autorizadas tan sólo si son de técnica corriente y no experimental.

Con una redacción de este tipo, nunca podrá surgir en la Argentina un profesional como el doctor Barnard, quien ensayó nuevas técnicas en Sudáfrica. Siempre estaremos atados a la posible importación de técnicas extranjeras y a que nuestros profesionales experimenten primero en el exterior y luego recién actúen en la República Argentina.

No se diga que luego el artículo 2º reproduce un concepto que ya figura en la ley actual y que abriría una puerta de salida, al afirmar: "La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance médico-científico". Sabemos bien que la aceleración de los tiempos en materia de avances científicos no camina al compás de la lentitud habitual de la burocracia.

Espero no haber fatigado la atención de la comisión, que debió haber meditado el tema, pues la cuestión de la técnica corriente y no experimental ya fue objeto de un debate en el Senado de la Nación, cuando se introdujo la reforma de 1984. En definitiva, habiendo ampliado la comisión los supuestos de hecho en los que resultan admisibles la ablación e implantación de órganos de modo que también abarquen los casos de inconveniencia de los otros medios y recursos disponibles, sugiero que se mantenga el criterio de la ley vigente sobre esta cuestión del carácter corriente y no experimental de las prácticas terapéuticas utilizadas. La ley parte del supuesto de que tales prácticas son a priori de técnica corriente y no experimental.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Verdú. — Señor presidente: no es para tocar un tema de fondo como acaba de hacer el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, sino para señalar una pequeña corrección ortográfica. En efecto, el artículo 2º dice: "La ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos podrán ser realizados...". Como "ablación" e "implantación" son sustantivos femeninos, la correspondencia gramatical exige utilizar el participio "realizadas".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: la comisión acepta la corrección gramatical señalada por el señor diputado por Santa Fe.

Con respecto a la observación del señor diputado López de Zavalia, deseamos requerirle que concrete la propuesta de redacción para el artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: el artículo 2º quedaría redactado así: "La ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se considerarán de técnica corriente y no experimental". El segundo párrafo del artículo quedaría como está propuesto.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Varela. — La comisión acepta la redacción sugerida por el señor diputado proponente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título I, que contiene los artículos 1º y 2º, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título II, que contiene los artículos 3º a 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: como lo dijera en oportunidad de tratarse el artículo 3º durante el período de sesiones ordinarias, esta disposición puede dividirse claramente en dos partes. La primera parte establece que los médicos que puedan realizar ablaciones son aquellos registrados y habilitados por la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional.

La primera parte de este artículo resguarda adecuadamente los derechos de los ciudadanos, porque esta norma tiene como protagonistas a

cada uno de nosotros y a quienes representamos, tanto receptores como dadores de órganos. Más aun, el proyecto en cuestión introduce un criterio de suplantar la voluntad individual de los ciudadanos por el concepto llamado de donación presunta.

Por otro lado, el segundo párrafo de este artículo tiene una redacción que me parece sumamente peligrosa. En este sentido, voy a proponer que sea suprimido o en caso contrario señalaré un texto alternativo, al mismo tiempo que voy a solicitar que este artículo sea votado nominalmente. Concretamente, lo que sugiero es que se suprima el párrafo que dice textualmente: "Excepcionalmente, cuando se den circunstancias de emergencia o de extrema urgencia —que deberán justificarse oportunamente— los profesionales médicos de los establecimientos asistenciales, registrados o no a los efectos de esta ley, podrán practicar la ablación de órganos o materiales anatómicos provenientes de personas fallecidas, siempre que se hayan cumplimentado los recaudos exigidos en la presente ley." Sé que se me van a explicar todos los recaudos que la norma prevé para autorizar que médicos no especializados realicen ablaciones. A esto nos vamos a referir en repetidas oportunidades a lo largo del debate.

Pero no estamos votando una ley común sino una normativa que decide sobre la vida y la muerte. Se trata de una iniciativa que en uno de sus artículos —como después veremos— establece que se puede ablacionar el órgano de un ser cuyo corazón late.

En consecuencia, me parece que no se puede extender a cualquier equipo médico la facultad de ablacionar. Por ello, solicito a la comisión que tenga a bien contemplar la preocupación de algunos señores diputados sobre este tema en particular, a pesar de que sabemos de los esfuerzos realizados por sus redactores. Queremos respetar el esquema de la iniciativa pero no deseamos dejar abierta la posibilidad para que cualquier médico pueda ablacionar órganos. No estoy presumiendo que los médicos sean deshonestos, simplemente digo que pueden existir personas deshonestas en cualquier sector de la comunidad, y prefiero tener la tranquilidad de que quienes ablacionan órganos sean médicos registrados en institutos adecuadamente controlados por la autoridad de aplicación.

Insisto en que no se trata de una norma común ni de un artículo común, por lo tanto, como ya he manifestado, pido a la comisión que considere mi propuesta o de lo contrario voy a solicitar que se vote separadamente el artículo 3º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: le recuerdo que la señora diputada Graciela Camano es el miembro informante de la comisión, motivo por el cual le solicito que le otorgue la palabra cuando ella lo requiera para hacer las observaciones que crea pertinente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia cederá el uso de la palabra al miembro informante de la comisión luego de escuchar todas las propuestas de los legisladores.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: hice tal aclaración porque pensábamos aceptar la propuesta formulada por el señor diputado Ruckauf.

Sr. Presidente (Pierri). — Reitero que podrán dar su opinión sobre el tema luego de escuchar a todos los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Alaba. — Señor presidente: coincido totalmente con lo expresado por el señor diputado Ruckauf en el sentido de que este artículo es inviable.

Cualquier médico no puede realizar ablaciones de órganos ni tampoco hacerlo en establecimientos no autorizados, porque existe una razón muy objetiva. Los órganos tienen que servir, y para que el órgano ablacionado esté en condiciones de ser trasplantado, tanto el establecimiento como los médicos tienen que poseer condiciones mínimas de operatividad como para que la operación tenga algún fin objetivo.

Por lo dicho, creo que el segundo párrafo del artículo 3º tendría que ser suprimido.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavala. — Señor presidente: deseo hacer dos observaciones con respecto al artículo en consideración sin perjuicio de pronunciarme luego con respecto a la sugerencia realizada por el señor diputado Ruckauf.

El artículo 3º exige para la inscripción que el médico acredite capacitación y experiencia en la especialidad. Propongo que las palabras "en la especialidad" sean reemplazadas por "según determine la reglamentación". La razón de esta sugerencia es que ante el texto de la ley un cirujano general de amplia experiencia podría preguntarse cómo se adquiere la experiencia en la especialidad si para ejercerla es requisito acreditar esa experiencia. Se encontraría ante un círculo vicioso imposible de resolver.

Al final del primer párrafo del artículo 3º se establece: "La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los per-

juicios que se deriven de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales recaudos". Sugiero que se suprima la palabra "solidariamente" porque su amplio alcance podría dar lugar a errores interpretativos.

En el Código Civil pueden darse tres situaciones distintas. Una de ellas es la llamada responsabilidad indirecta o concurrente en virtud de la cual, según la doctrina del artículo 1.123, el responsable indirecto que indemniza tiene una acción de reintegro contra el autor del daño.

El segundo supuesto es el de la responsabilidad solidaria para los autores, cómplices o consejeros en los delitos, en cuyo caso quien indemniza el daño no tiene acción alguna de reintegro, de acuerdo con lo expresado en el artículo 1.082.

El tercer caso es el de la solidaridad en los cuasidelitos, en cuyo caso el que indemniza el daño tiene una acción de reintegro limitada contra los otros, según lo normado en la segunda parte del artículo 1.109.

En el artículo 3º, al igual que en los artículos 4º y 5º, se habla de solidaridad aunque las situaciones no son iguales. Entiendo que en el artículo 4º pueda contemplarse el caso de solidaridad establecido en los artículos 1.082 o 1.109 del Código Civil, según exista o no dolo. Pero no comparto la atribución de solidaridad a la autoridad de contralor o a la institución, porque su responsabilidad debe ser indirecta y concurrente, con posibilidad de reintegro contra el autor del hecho.

Por esta razón sugiero que se suprima la palabra "solidariamente" en los artículos 3º y 5º, limitando la responsabilidad al libre juego de los principios generales, lo que permitiría la acción de reintegro contra el autor del hecho. En cambio, sí puede quedar esta palabra en el artículo 4º en la inteligencia de que se va a aplicar según los casos el régimen del artículo 1.082 del Código Civil o el 1.109 del mismo cuerpo legal.

En suma, para que la comisión pueda evaluar lo que acabo de exponer, propongo concretamente que en el artículo 3º se reemplace la expresión "experiencia en la especialidad" por "experiencia según determine la reglamentación" y se suprima el término "solidariamente".

En cuanto al artículo 5º, sugiero que también se suprima la palabra "solidariamente".

Me hago cargo de la aguda observación realizada por el señor diputado Ruckauf. Es algo que debemos meditar. Tan solo a título informativo recuerdo a los señores diputados que, en lo que fuere conducente, se trata de una previsión contemplada en el segundo apartado del artículo 3º de la ley vigente, de manera que si se supri-

miera este último apartado del artículo proyectado estaríamos innovando.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. — Señor presidente: mi observación ha sido parcialmente expuesta por el señor diputado López de Zavalia en lo que se refiere al artículo 5º, de modo tal que sólo me resta hacer una reflexión.

El artículo 5º expresa lo siguiente: "Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán solidariamente responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal." No agregaré nada con respecto a la palabra "solidariamente" pues creo que el tema ya ha sido suficientemente expuesto. Mi observación se basa en que el artículo debería completarse en cuanto a los alcances de este cuerpo legal relativos a la actividad médica, porque es una responsabilidad prevista solidariamente entre instituciones y médicos pero no se especifica de qué se trata. Apparently la responsabilidad solidaria de médicos e instituciones podría recaer en todo lo que se refiere a esta ley, pero la misma no sólo comprende el marco médico sino también el administrativo y otros.

Concretamente, propongo a la comisión que el artículo 5º se complete agregando al final "en cuanto a la actividad médica", suprimiéndose asimismo el término "solidariamente".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño. — Señor presidente: cuando allá por el mes de agosto comenzamos a trabajar en la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, juntamente con la de Legislación General para estudiar el proyecto de ley que cambiaría las tres leyes que rigen la actividad trasplantológica en nuestro país lo hicimos con muchísima dedicación y, por sobre todas las cosas, intentando dar a la nueva norma la mayor transparencia y seguridad posibles. Precisamente, la palabra que utilizamos constantemente en su redacción es "seguridad". De este modo tratamos de llevar a nuestros conciudadanos la tranquilidad de que la norma garantizará la posibilidad de la procuración de órganos cadavéricos para aquellos que sufren terribles flagelos en su salud y tienen la necesidad de conseguir órganos para llevar a cabo los trasplantes. En función de esto hemos elaborado la norma en consideración; desde un primer momento pensamos en los derechos de nuestros ciudadanos. No obstante, existen algunas cuestiones —como la planteada por el se-

ñor diputado Ruckauf— que nos parecen atinadas.

Por lo tanto, la comisión acepta la propuesta formulada en el sentido de suprimir el último párrafo del artículo 3º. En lo que se refiere a los aspectos pura y exclusivamente legales que plantearan los señores diputados Ortiz Pellegrini y López de Zavalia, el señor diputado Varela dará a conocer la posición de la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: como todos sabemos, el proyecto de ley en consideración es sumamente complejo, y además, su extenso articulado debe ser considerado integralmente como una sola unidad jurídica. Por otro lado, la ley que sancionemos estará sujeta a una reglamentación que también será bastante extensa, y a la vez tendrá que considerar aspectos médicos y jurídicos a fin de que esta norma sea absolutamente operativa. En consecuencia, debemos hacer jugar el articulado del capítulo II con las restantes normas contenidas en el proyecto de ley.

En lo que se refiere a las observaciones formuladas por el señor diputado López de Zavalia, la comisión acepta la supresión de la palabra "solidariamente" en el artículo 3º, pero rechaza su propuesta en el sentido de reemplazar las palabras "experiencia en la especialidad" por los términos "experiencia según determine la reglamentación", pues obviamente los requisitos para la inscripción y todas las demás cuestiones serán contempladas por la reglamentación de la ley.

En cuanto a la supresión del segundo párrafo del artículo 3º la comisión acepta la propuesta formulada por el señor diputado Ruckauf, tal como manifestara la señora diputada por Buenos Aires. Por otra parte, la comisión no va a aceptar el agregado propuesto por el señor diputado Ortiz Pellegrini, pues resulta natural y obvio que las responsabilidades a las que se refiere el artículo 5º se relacionan con los actos médicos y no con los actos de terceros. Si vamos a aceptar la propuesta formulada en el sentido de eliminar la palabra "solidariamente" de este artículo 5º.

Sr. Ceballos. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: si se suprime el segundo párrafo del artículo 3º, deberá entonces suprimirse la última parte del artículo 4º,

que dice: "se encuentren o no inscritos como equipo", porque debido a la modificación que vamos a votar, esto sólo será para los inscriptos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — La comisión acepta la supresión propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el título II.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título III, que incluye los artículos 9º a 12. Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: por las mismas razones apuntadas anteriormente y aceptadas por la comisión, solicito que en los artículos 9º y 10 se suprima la palabra "solidariamente".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: deseo proponer una modificación al artículo 9º.

Nosotros entendemos que existen dos tipos de conductas médicas en esta problemática que tenemos en consideración. Por un lado, la ablación del órgano y, por el otro, la implantación o el trasplante de dicho órgano. Me preocupa mucho la forma en que se hará el trasplante; cuál será el instituto que lo va a realizar, porque un trasplante constituye realmente una operación de alta complejidad.

Para que el trasplante sea un éxito se debe contar, a mi modo de ver, con todo el apoyo tecnológico y médico suficiente. Si cuidamos este detalle estaremos haciendo una sana contribución para que la sociedad entienda que donar órganos es algo positivo, que vale la pena.

Por lo tanto, solicito que el artículo 9º quede redactado de la siguiente forma: "Los trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos que cuenten con estructuras hospitalarias polivalentes de alta complejidad registrados por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional." El resto del artículo continuaría tal cual está.

Salvo el caso de las córneas, cuyo trasplante se puede realizar sin ningún tipo de apoyatura especial sobre el cadáver, en los otros casos se requieren mayores requisitos, como ser, la respiración asistida.

Muchas veces las donaciones acontecen debido a accidentes seguidos de muerte en hos-

pitales pequeños del interior del país. En consecuencia, creo que no se puede equiparar el establecimiento en el que se realiza la ablación con aquel en el que se debe llevar a cabo el trasplante, ya que este último debe hacer el seguimiento, lo debe monitorear, y probablemente deba realizar tomografías computadas u otro tipo de estudios. Resulta digno de tener en cuenta que hay instituciones que no cuentan con estos elementos de alta complejidad, poniendo en peligro la vida y la suerte del transplantado.

7

INDICACION

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Quezada. — Señor presidente: desde ya pido disculpas a la Cámara por apartarla del tema en consideración, pero quiero plantear una moción de orden sobre un hecho que a mi criterio reviste suma gravedad. Se trata de las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo nacional con referencia a la cuestión energética, desconociendo las facultades del Congreso de la Nación.

Cuando esta Cámara aprobó los marcos regulatorios eléctrico y gasífero, se propuso la constitución de comisiones integradas por senadores y diputados a fin de analizar los antecedentes de quienes van a ocupar cargos muy importantes, como miembros de los entes reguladores, ya que entre otras cosas tendrán estabilidad, fijarán los esquemas tarifarios y definirán cuestiones a las que durante muchos años va a estar sometido el pueblo argentino.

Si bien este proceder en su momento fue repudiado por el radicalismo, quiero advertir de esta situación a la Cámara. Por eso planteo esta moción de orden en el sentido de que asumamos nuestras facultades y como miembros de dichas comisiones emitamos un juicio de valor y demos nuestra opinión acerca de quiénes van a ser los integrantes de los entes reguladores.

Han trascendido públicamente los nombres de algunos de estos integrantes de los mencionados entes, conspicuos representantes —muchos de ellos— de los grupos económicos que hoy se están quedando con Gas del Estado y que en su momento se quedaron con SEGBA. Seguramente, ocurrirá lo mismo con Hidronor y Agua y Energía.

Por las razones expuestas, pido expresamente la atención de esta Cámara, y exhorto a la Presidencia para que, junto con la Presidencia del Honorable Senado, constituyan cuanto antes las comisiones y soliciten al Poder Ejecutivo nacio-

nal se abstenga de realizar cualquier tipo de designación al respecto, hasta tanto el Congreso dé una opinión sobre este tema. Si bien es cierto que tal opinión no será un dictamen vinculante, no lo es menos que de confirmarse ciertos nombres que se han dejado trascender, este bloque tendrá muchas cosas que decir.

En resumen, pido que la Presidencia de esta Cámara se ponga en contacto con su par del Senado —sabemos que ya fueron designados los miembros de este cuerpo que van a integrar las comisiones—, para que en forma inmediata se constituyan y se lo comuniquen al Poder Ejecutivo. Vale aquí aclarar que este bloque ya se comunicó por telegrama con el ministro Cavallo, y le solicitó que se abstenga de realizar cualquier tipo de designación al respecto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: no alcanzo a comprender cuál es la moción de orden que plantea el señor diputado. No obstante, anticipo a la Honorable Cámara que nuestro bloque no va a votar mociones de orden que requieran mayorías especiales, si previamente no han sido acordadas, en razón de que vamos a dar prioridad al tratamiento del proyecto para cuyo análisis fue convocada la Cámara.

De todas maneras, el fondo de la cuestión planteada constituye un tema que compartimos plenamente en lo que respecta a las gestiones vinculadas con las comisiones especiales, creadas por una ley del Congreso, con el objetivo de analizar las propuestas de privatización. En tal sentido, deseamos que cumplan con su función.

Coincidimos entonces respecto de este asunto y estamos deseosos de que se agilice este tema.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia aclara que no se trata de una moción sino de una solicitud que ha formulado el señor diputado Quezada y de la que se ha tomado debida nota, a efectos de proceder en consecuencia. Por otra parte, hay varias comisiones de orden bicameral respecto de las cuales esta Cámara ya ha procedido a la designación de sus integrantes, faltando los propuestos por el Senado.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente: quería recordar que por medio de diversas notas elevadas por nuestro bloque hemos solicitado que se proceda a la constitución de la Comisión Bicameral de Control Parlamentario de Servicios de Inteligencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Está constituida, señor diputado.

Sr. Storani. — Entiendo que no, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Ha sido constituida por parte de esta Cámara, señor diputado.

Sr. Storani. — Hemos pedido que la Presidencia haga la exhortación para que el Senado la integre.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ya ha exhortado al Honorable Senado, señor diputado.

Sr. Storani. — Agradezco la información, pero no obstante ello es conveniente señalarlo porque ha transcurrido mucho tiempo desde que se efectuaron las nominaciones —julio de este año— y conocemos muchos hechos que son públicos y notorios, como el caso de Noguera Vega.

8

IMPLANTACION DE ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.

Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: vamos a proponer una modificación con relación al artículo 12 en consideración, que se encuentra en el título referido a la periodicidad de las inspecciones que debe realizar la autoridad jurisdiccional sanitaria para la habilitación de las instituciones dedicadas a este menester.

Al utilizarse en el último párrafo la expresión "sin previa autorización de la autoridad sanitaria jurisdiccional", pareciera que los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley podrán efectuar modificaciones que disminuyan sus condiciones de habilitación, con previa autorización de la autoridad sanitaria jurisdiccional. Por lo tanto, proponemos que se suprima la expresión señalada, de manera que en ninguna forma la autoridad sanitaria jurisdiccional pueda disminuir las condiciones de habilitación de estos establecimientos.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sra. Camaño. — Señor presidente: la comisión no acepta las observaciones formuladas por los señores diputados Albamonte y López de Zavalla, pero sí la propiciada por el señor diputado Ceballos en el sentido de suprimir la expresión "sin previa autorización de la autoridad sanitaria jurisdiccional".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: me preocupa el silencio del señor diputado Varela porque como argumento de lo ya aceptado por la comisión en otros artículos. Sólo pregunto si ha cambiado el criterio.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título III, que comprende los artículos 9º a 12, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título IV, que comprende el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Verdú. — Señor presidente: tengo dos observaciones que formular al artículo 13. La primera de ellas se relaciona con el hecho de que en el primer párrafo se establece que los profesionales deben informar a cada paciente y a su grupo familiar. Pregunto a la comisión si no sería más adecuado cambiar la conjunción "y" por "o".

En la ley vigente sólo se determina que la información debe brindarse al paciente, y, aquí se amplía la obligación incluyendo al grupo familiar. Al establecer "y su grupo familiar", se crea la obligatoriedad y no pensamos en todo lo que podría ocurrir. ¿Quiénes integran el grupo familiar conviviente? ¿Y si hubiera discrepancias entre ellos? Además, ¿no estamos afectando el derecho a la privacidad del paciente en cuanto a la información a suministrar a terceros?

En definitiva, más que establecer una obligación para el médico, habría que dejarle la opción para que informe a quien crea conveniente según el interés del paciente.

La otra observación se relaciona con el tercer párrafo de este artículo. Allí se establece que en caso de que el dador de médula ósea fuera menor, también se deberá informar a su representante legal. ¿No nos quedamos cortos en este caso? ¿Solamente le informamos al representante legal? ¿No habría que agregar que también hace falta obtener el consentimiento del representante legal?

Por lo tanto, sugiero que a continuación de "la información prevista en este artículo deberá ser dada, además, a su representante legal" se agregue: "para la obtención de su consentimiento".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. — Señor presidente: tengo la misma inquietud respecto del grupo fa-

miliar conviviente. Creo que la intención de la comisión fue la de consagrar el deber de informar del médico, quizá con el fin de darle mayor seguridad al profesional que hace este tipo de intervención.

Si la intención fue la de dar seguridad al profesional médico, más que favorecerlo, el agregado que se propone a la legislación vigente va en contra de sus intereses. Si además de informar al paciente debe informar al grupo familiar conviviente, ¿dónde termina su obligación? ¿Cuál es el grupo familiar conviviente?

De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo, *in fine*, del artículo 13, me parece que dejamos a los médicos con una verdadera inseguridad. Nunca sabrán si han agotado su deber de información. A ello se agrega que el concepto de grupo familiar conviviente es oscuro y muy poco limitado.

También hay que tener en cuenta que la relación médico-paciente es de orden absolutamente privada y protegida por el secreto profesional desde el punto de vista del médico y por el derecho a la privacidad que tiene el paciente. Si ésta es una relación privada me pregunto hasta qué punto el médico puede violarla por sí mismo, convocando a una suerte de votación —entre comillas— de todos los parientes para que opinen sobre un tema absolutamente íntimo, como es la salud del paciente.

Concretamente, propongo a la comisión que se suprima la expresión "grupo familiar conviviente". En caso de que no se acepte mi postura, quisiera que el señor miembro informante explicite cómo se limita este concepto, a fin de otorgar seguridad a los médicos con respecto a su deber de información. La explicación del señor miembro informante serviría como pauta interpretativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: después de que con respecto a las modificaciones sugeridas a los artículos 9º y 10 fuera tratado como una suerte de legislador cadavérico, sólo me queda un poco de humorismo para comenzar a enfrentar este artículo, en la esperanza de que sea recogida parte de mi observación.

Este artículo 13 es genérico, pues contempla tanto la dación por actos *inter vivos*, como la que se verifica *mortis causa*, según surge del último apartado.

Con respecto a la ablación *mortis causa*, no se sabe cómo se obtendrá el consentimiento del dador, pero los juristas encontrarán el remedio al aplicar aquel célebre principio *impossibilia nu-*

lla est obligatio. Lo que en realidad me preocupa son otros dos aspectos.

El primero ya ha sido mencionado por los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Se refiere a la información a otorgar al grupo familiar conviviente. No creemos que pueda obligarse al médico a conocer al grupo familiar conviviente. Sugeriría que se diga: "a los miembros del grupo familiar conviviente que estuvieren presentes". De esta forma se satisfaría la inquietud que espero haya dominado a la comisión.

El otro aspecto me parece más grave. Es el relativo a los incapaces. El texto distingue según se trate del receptor en cualquier caso o del dador frente al trasplante de médula ósea. Para ambas hipótesis exige que la información debe ser brindada a su representante legal. Sostengo que no es igual la situación del integrante del grupo familiar conviviente que la del representante legal, ya que en este último caso no sólo debe ser informado, sino que debe obtenerse su conformidad, porque sin ella no puede actuarse sobre el incapaz.

Por otra parte, del texto resultaría que para ser receptor, cuando se trate de un incapaz, siempre se requerirá su consentimiento. Comprendo que ello sea así cuando se trata de un incapaz que es capaz de discernimiento para los actos ilícitos del artículo 921 del Código Civil, pero imagínense que se trate de hacer un implante en un menor de dos años, que ni siquiera sabe hablar. ¿Cómo se va a solicitar su consentimiento? Por tener la desgracia de no poder expresar su voluntad, ¿se lo va a privar del implante que puede salvar su vida, si presta el consentimiento el representante legal?

Sugiero el siguiente texto para el penúltimo párrafo: "Si el receptor fuera incapaz, la conformidad deberá ser dada por su representante legal, requiriéndose además la del propio incapaz si tuviera discernimiento para los actos lícitos. En caso de trasplante de médula ósea, los incapaces sólo podrán ser dadores si tuvieran discernimiento y con la conformidad del representante legal."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: a fin de resolver la difícil definición de lo que es el grupo familiar conviviente, sugiero que se reemplace la frase "deberán informar a cada paciente y su grupo familiar conviviente" por "deberán informar a cada paciente y a las personas que establece el artículo 21, con el mismo orden en que

se enumeran y condiciones que se fijan en el mismo para ellas".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — La comisión acepta la inquietud expresada por los señores diputados Ortiz Pellegrini y Ceballos, y propone suprimir la palabra "conviviente" utilizando la frase "y su grupo familiar en el orden que establece el artículo 21".

Con referencia a las observaciones formuladas por el señor diputado López de Zavallia, es necesario destacar que este título habla de la previa información médica a dadores y receptores. Es decir que de ninguna manera trata el tema del consentimiento, que está contemplado en los títulos V y VI, donde se considera la situación de los dadores y se prevén todas las situaciones que se pueden dar a partir de la premisa de que los menores de edad no pueden ser dadores de órganos y que la donación entre vivos únicamente es admisible entre personas relacionadas. Por lo tanto, la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado López de Zavallia, con la aclaración de que el trasplante de médula ósea es, desde el punto de vista de la ciencia médica de hoy, hay una operación sumamente sencilla que no ofrece ningún tipo de riesgo.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: solamente para aclarar a la comisión que cuando propusimos hacer referencia al orden y condiciones que establece el artículo 21 teníamos en cuenta que esa norma exige que las personas enumeradas estén en pleno uso de sus facultades mentales. Sugiero entonces que la redacción sea: "y su grupo familiar en el orden y condiciones que establece el artículo 21".

Sr. Varela. — La comisión acepta la sugerencia del señor diputado Ceballos.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavallia. — Señor presidente: únicamente para recordar a la comisión que aunque la rúbrica al título IV sea "De la previa información médica a dadores y receptores", del segundo párrafo del artículo surge que contempla el consentimiento del interesado.

Sr. Presidente (Pierri). — No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar el título IV —artículo 13— con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título IV, que comprende el artículo 13.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título V, que comprende los artículos 14 a 18.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Verdú. — Señor presidente: tanto en el artículo 14 como en el 15 la palabra "trasplante" figura con la letra "n". Creo que lo más correcto es escribirla sin ella. Del mismo modo, entiendo que "comunidad trasplantológica" debe escribirse sin la letra "n".

El artículo 15, al hablar del consentimiento del dador, dice: "El consentimiento del dador no puede ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad." ¿Pero qué ocurre en caso de que la persona pierda la capacidad para expresar su voluntad? Sería necesario aclarar esta situación agregando al final del párrafo: "...ante cuya falta la ablación no será practicada." No puede ser que dejemos al incapacitado en inferioridad de condiciones cuando se contempla la posibilidad de revocar la decisión hasta el momento de la intervención quirúrgica sin ninguna consecuencia monetaria para el dador.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: en relación con el artículo 16 propongo el siguiente agregado: "Las entidades encargadas de la cobertura social o empresas privadas de medicina prepaga deberán notificar fehacientemente a sus beneficiarios si cubren o no dichos gastos." Conviene realizar esta aclaración porque muchas personas creen —equivocadamente— que estas entidades cubren los gastos de trasplantes y mi propuesta ayudaría a una mejor relación entre dichas entidades y sus potenciales pacientes.

El artículo 17 establece: "Las inasistencias en que incurra el dador..." Propongo sustituir este párrafo por: "Las inasistencias a su trabajo en las que incurra el dador..." a fin de perfeccionar el texto propuesto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: el segundo párrafo del artículo 18 dice: "Cuando se efectúe un trasplante cardiovascular en bloque proveniente de dador cadavérico, el receptor del mismo podrá autorizar la ablación con fines del trasplante de su propio corazón, que

será necesariamente practicada para permitir el implante del bloque. La autoridad de contralor dispondrá de este órgano para su asignación en los términos previstos en la presente ley." Deseo formular una observación con respecto a las palabras "podrá autorizar", porque aquí hay dos situaciones que contemplar: la ablación en sí y la aplicación posterior para fines de trasplante.

La ablación en sí no está en discusión, porque sin duda quien quiere ser receptor de un trasplante cardiopulmonar en bloque quiere que procedan a la ablación de su propio corazón. Lo que está sujeto a autorización es la aplicación ulterior de ese órgano. Personalmente pienso que quien recibe el beneficio de un bloque cardiopulmonar no puede negarse a que su propio corazón, extraído necesariamente, sea utilizado con fines de un trasplante ulterior.

Por lo expuesto, sugiero otra redacción en los siguientes términos: "Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de dador cadavérico, la autoridad de contralor podrá disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previsto en la presente ley".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. — Señor presidente: formularé dos observaciones con respecto al artículo 15. Este artículo dice lo siguiente: "Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge..." —hasta aquí no hay problemas— "...o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida...". No tengo ninguna duda de que este largo párrafo se refiere a la concubina. Es decir, concretamente se quiere proteger a la concubina para que también pueda ser beneficiaria de un órgano trasplantado de quien convive con ella.

Ahora bien, si se quiere proteger a la concubina no entiendo por qué se establece un lapso de tres años cuando antes era de cinco. ¿Por qué debe convivir en forma pública, ininterrumpida y continua en un momento en que nuestra legislación civil acepta el divorcio vincular y las nupcias sucesivas? Esta distinción me parece realmente anacrónica. Si esto se autoriza para todos, no veo por qué

razón debemos limitar el caso de la concubina a la necesidad de que su relación tenga no menos de tres años, siendo que se trata de una situación de orden absolutamente íntimo la convivencia de tipo conyugal que menciona el artículo. Si por un accidente o cualquier otra razón igualmente involuntaria se produjera antes de que se cumpla ese período la necesidad de que esa mujer sea beneficiaria de un trasplante, no veo por qué razón se debe establecer tal limitación. Por supuesto, me estoy refiriendo a que este caso se dé entre personas vivas, que es a lo que se refiere el artículo.

La segunda observación que quiero hacer con respecto al artículo 15 se refiere a los menores de 18 años. En el artículo 13 —que ya aprobamos— habíamos aclarado que la información debía ser brindada asimismo al representante legal del menor. No hay inconveniente en que ello sea así, pero advierto que en el párrafo sexto del artículo 15 se expresa: “El consentimiento del dador no puede ser sustituido ni complementado...”. Concretamente, me parece que aquí hay una contradicción con el párrafo inmediatamente anterior, que dice que el menor de 18 años debe requerir la autorización de su representante legal; por lo tanto, no podemos decir dos renglones más abajo que el consentimiento del dador —en este caso, menor de 18 años— no puede ser sustituido ni complementado. Por ello propongo una redacción que diga: “El consentimiento del dador o de su representante legal no puede ser sustituido ni complementado”.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf — Señor presidente: en primer lugar coincido con la observación formulada por el distinguido colega López de Zavalía, cuya propuesta de redacción es la más apropiada dado el espíritu global de la ley y la situación en que se encuentra quien resulta beneficiado con una donación de estas características.

Por otro lado, coincido con la segunda afirmación del señor diputado Ortiz Pellegrini, aunque no con la primera. En tal sentido, entiendo que debemos mantener la redacción del proyecto. No podemos obligar a la gente a que se case, pero la existencia de una convivencia suficientemente demostrada tiene un plazo razonable en el artículo pertinente.

Hago notar a la comisión lo que, a mi juicio, significaría una contradicción jurídica. El artículo 15 se refiere a la persona capaz mayor de 18 años; pero no nos olvidemos de que el proyecto de ley por el que reduce la mayoría de edad aún no ha sido definitivamente sancionado. En consecuencia, habría una contradicción jurídica si nosotros sancionáramos el proyecto de ley en consideración manteniendo su actual redacción y el Senado no aprobara el proyecto de ley sobre mayoría de edad. Por lo tanto, sugiero que utilicemos los términos “mayor de edad” o “menor de edad”, según corresponda, con lo cual siempre quedaríamos en concordancia con la ley de mayoría de edad. La modificación que sugiero corresponde en los tres casos en que el artículo 15 se refiere a mayores o menores de 18 años.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Algaba. — Señor presidente: el artículo 14 del proyecto establece que la extracción de órganos o materiales anatómicos en vida estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor.

Por otro lado, el artículo 15 determina que esta ablación sólo será permitida cuando la espera de un órgano proveniente de dador cadavérico ponga en peligro grave la salud o la vida del receptor.

Las consideraciones jurídicas establecidas en el artículo 14 se contraponen con una fundamentación de fondo acerca del destino del trasplante. En consecuencia, propongo que sean suprimidas las cuestiones de criterio contenidas en ese artículo, pues sabemos que ningún médico va a matar a un paciente para quitarle sus órganos y realizar un trasplante. Es obvio que los criterios médicos en torno a los trasplantes están perfectamente fundamentados con respecto a las soluciones que se le pueden dar al paciente que va a recibir el órgano. Por lo tanto, propongo que el artículo 14 quede redactado de la siguiente manera: “La extracción de órganos o de materiales anatómicos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente ley, sólo será permitida cuando la espera de un órgano proveniente de dador cadavérico ponga en peligro grave la salud o la vida del receptor...”

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: solicité el uso de la palabra justamente para hacer mención al tema de la mayoría de edad. En tal sentido, coincido con lo manifestado por el señor diputado Ruckauf en torno al artículo 15, aunque advierto que existen otros artículos que hacen referencia a los 18 años de edad. Por lo tanto, propongo que el proyecto de ley haga mención a los términos “mayor de edad”, o “menor de edad”, según corresponda.

Por otro lado, apoyo la proposición formulada por el señor diputado López de Zavala dado el espíritu de solidaridad que debe existir por parte de quien recibe un órgano.

Estas son las dos consideraciones que descaba formular en torno del artículo 15, adelantándome al tema de la mayoría de edad que vuelve a aparecer en el artículo 19 contenido en el capítulo VI.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Argüello. — Señor presidente: deseo formular dos consideraciones relacionadas con el artículo 15.

La ley 21.541, del año 1977, estableció la posibilidad de donación de órganos entre vivos relacionados, lo que ahora contemplamos dentro de la normativa en tratamiento. Asimismo, fijó los 18 años como edad necesaria para que el trasplante se pudiese hacerse.

Este concepto sufrió una modificación a través de la ley 23.885, cuando en forma involuntaria —desde mi punto de vista— se dejó de lado el espíritu que el legislador tuvo en miras en el año 1977.

Digo esto porque en 1977 se estableció la edad de 18 años y no la mayoría de edad. Si trabajamos sobre una hipótesis de donación de órganos entre hermanos, no puede razonablemente hablarse de una edad de consentimiento mínima de 21 años. Es decir, la ley original fijaba la edad de 18 años y la modificación estableció la de 21, que es la edad necesaria todavía en la Argentina para adquirir la mayoría de edad.

La voluntad del legislador en este proyecto es retomar la edad de 18, para poner fin a la innumerable cantidad de amparos judiciales solicitados para resolver situaciones de donaciones entre menores de 21 años vivos relacionados, ya que en todos los casos la jurisprudencia ha respetado el espíritu original del legislador de 1977.

Por consiguiente, propongo que el primer párrafo del artículo 15 quede redactado de la siguiente forma: ‘Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vi-

da con fines de trasplante sobre una persona mayor de dieciocho (18) años...’, y el artículo continúa tal cual está redactado.

En suma, lo que estoy proponiendo es la eliminación de las palabras “capaz mayor”, al solo efecto de subsanar esta evidente contradicción.

La segunda consideración que deseo formular se refiere al párrafo cuarto del artículo 15, que dice: “Esta ablación sólo será permitida cuando la espera de un órgano proveniente de dador cadavérico ponga en peligro grave la salud o la vida del receptor.” Se está refiriendo al trasplante entre vivos relacionados.

Es evidente que la estructura del proyecto de ley en consideración está diseñada con el ánimo de privilegiar en todos sus términos la donación cadavérica en nuestro país, manteniendo un criterio absolutamente restrictivo en lo que se refiere a la donación entre vivos y limitándola exclusivamente a los vivos relacionados. En ese sentido hemos mantenido también el espíritu del año 1977, permitiéndose hasta el cuarto grado de consanguinidad...

Sr. Ruckauf. — ¿Me permite una interrupción señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Argüello. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: sería conveniente que la comisión o el señor diputado Argüello —cuyos argumentos me parecen bastante lógicos— encuentren una redacción que exprese adecuadamente esta propuesta, porque a mi entender no alcanza con suprimir las palabras “capaz mayor”. Pensemos que se trata de un menor, porque hoy en día, un joven de 18 años todavía sigue siendo menor y necesita una autorización.

En consecuencia, tendríamos que hacer una revisión del párrafo 5º de este artículo 15. No tengo inconvenientes en lo relativo al concepto de los 18 años, pero observo una contradicción entre la definición de “capaz mayor” y la mayoría de 18 años. Si se quiere sostener el concepto de 18 años, se debe adecuar la redacción para que prevea una autorización legal de la persona que ejerce la tutoría sobre el menor.

Aclaro a la comisión y al señor diputado Argüello que podría existir en este caso una contradicción: que tuviera que dar la autorización la propia persona que recibe la donación. Por ejemplo, en el caso de que un hijo tenga que ser donante de su padre; si sólo cuenta con el padre

como familiar, vivo éste tendrá que dar la autorización.

La redacción de este artículo debería ser más afinada; si bien comparto el criterio del señor diputado Argüello, reitero que la redacción no es tan sencilla como él la plantea. No alcanza con quitar un concepto; hay que procurar una nueva redacción. En este sentido podríamos seguir considerando los artículos que siguen, mientras la comisión busca una redacción adecuada de este texto sobre la base de los 18 años.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Argüello. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: realmente la ley 23.464, tal como lo señalara el señor diputado Argüello, entraba en una contradicción porque en su artículo 13 hablaba de persona capaz mayor de edad, que podrá voluntariamente disponer la ablación en vida de algún órgano, mientras que en su artículo 17 decía que toda persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, podrá disponer para después de su muerte la ablación de órganos. No soy abogado, pero tengo entendido que, desde el punto de vista jurídico, ambas disposiciones son iguales. Y, sin embargo, la ley habla en un caso de ser mayor de edad, y en el otro dice simplemente mayor de 18 años.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Argüello. — Señor presidente: me parecen absolutamente razonables los planteos de los señores diputados preopinantes, y en este sentido la comisión está trabajando para encontrar el texto más adecuado.

Con relación a la segunda parte de mi exposición, la misma está orientada al artículo 15, en su párrafo cuarto, donde se dice: "Esta ablación sólo será permitida cuando la espera de un órgano proveniente de dador cadavérico ponga en peligro grave la salud o la vida del receptor".

Voy a solicitar a la comisión la eliminación de este párrafo cuarto, porque lo que tengo en mente en este momento es el caso del enfermo renal crónico. Los médicos no consideran enfermo grave a quien se está haciendo un tratamiento de diálisis. El trasplante no se realiza en el período grave de salud del receptor sino cuando está gozando del mejor estado de salud en diálisis para soportar la operación y la inmunosupresión con la menor posibilidad de complicaciones.

Creo que si nosotros exigimos lo prescrito en el párrafo cuarto estaríamos condenando a muchos enfermos que podrían recibir un riñón de su esposo, su hijo o su hermano, obligándoles a continuar en el sillón de diálisis o a tener que abrir una cuenta en un banco para conseguir la cantidad de dinero suficiente —que por cierto no es poca— para poder realizar fuera del país un trasplante de las características que permite la ley en la República Argentina. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. — Señor presidente: no puedo dejar de señalar lo inconveniente que resulta haber obviado los procedimientos reglamentarios en cuanto al tiempo de observación de los proyectos, que nos lleva a trabajar prácticamente en el recinto como si estuviéramos en comisión. No debemos olvidar que éste es un tema muy delicado y sumamente trascendente.

En relación a la observación formulada por el señor diputado López de Zavalla, que comparto, entiendo que en el último párrafo del artículo 18 debería obviarse también la referencia a "proveniente de dador cadavérico" en relación con los trasplantes cardiopulmonares en bloque, ya que pareciera inadmisibles que un trasplante de esa naturaleza tuviera por origen a un ser vivo. Entiendo que esa expresión es sobreabundante y lesiona la técnica legislativa de este proyecto, ya bastante cuestionable.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Brook. — Señor presidente: anteriormente había solicitado una interrupción para hacer referencia a lo que señalaba el señor diputado Argüello con relación al artículo 15.

Oportunamente presenté un proyecto de ley modificando las condiciones habilitantes para ser donante entre vivos, teniendo en cuenta que la capacidad se fija a partir de los 18 años. Al establecerse la mayoría de edad a los 21, se deja de lado a un segmento importante de la población que tendría la posibilidad de ser dador, circunstancia que se da con mucha frecuencia entre quienes están vinculados por una relación de parentesco.

Como bien lo expresaba el señor diputado Argüello, esta situación se soluciona por medio de una acción de amparo, pero entiendo que la letra de la norma debe volver a la redacción anterior y que la fórmula contenida en el despacho en análisis es correcta, toda vez que se refiere a personas mayores de 18 años, aun cuando no tuvieran la mayoría de edad, si es que en definitiva el proyecto de mayoría de

edad sancionado por esta Cámara no fuera aprobado por el Senado y nuestra ley civil habilita al menor de 18 para realizar actos de disposición, como cuando se lo autoriza a testar o a reconocer hijos extramatrimoniales.

Consideraciones similares nos pueden llevar a concluir que una persona con 18 años cumplidos ya tiene la habilidad suficiente, aun cuando no sea mayor de edad, para disponer como dador de su propio cuerpo o de parte de él.

Esto siempre y cuando estemos hablando de la habilidad para ser dador entre vivos. En el proyecto al que hacía referencia y que también fue considerado por la comisión, habíamos otorgado la habilidad para ser dador de médula ósea a partir de los 16 años, circunstancia que la comisión ha considerado con un sentido más amplio, otorgándola a cualquier edad, con la autorización del representante legal.

No estoy de acuerdo con la eliminación de la palabra "capaz" que propone el señor diputado Argüello a modo de solución, toda vez que hay personas mayores de 18 años —o de 21— que son incapaces jurídicos de hecho; me refiero a los declarados dementes, o sea quienes necesitan siempre de la autorización de su representante legal.

Entiendo que la fórmula más acertada es la que contiene el proyecto en análisis y la comisión deberá defenderla, porque es la más apropiada a lo que se pretende.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: cuando esta Cámara tuvo oportunidad de discutir el proyecto de ley sobre reforma al régimen de la mayoría de edad, hubo importantes intervenciones que abundaron sobre las disposiciones legales existentes en nuestra legislación civil y comercial que habilitan a los jóvenes en aspectos absolutamente puntuales. Nos estamos refiriendo exactamente a los jóvenes entre 18 y 21 años de edad.

Esto ha sido puntualizado por el señor diputado Brook, autor de uno de los proyectos que han sido sancionados y que actualmente están a estudio del Honorable Senado. Allí se establece que, entre otras cosas, los jóvenes de 18 años pueden testar, ser socios de cooperativas y reconocer hijos extramatrimoniales.

Al proyectar esta normativa la mayoría de edad para ser donante o receptor de órganos no es la establecida por el Código Civil, sino la de 18 años, conforme se ha explicado anteriormente. A esa edad a una persona se la considera absolutamente apta para donar sus órganos.

Interpreto que la redacción debe mantenerse tal cual fue propuesta por las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General, sin alterarse en lo más mínimo ese texto.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Mario Carlos Brook.

Sr. Parente. — Además debe mantenerse el término "capaz" porque —como bien se ha subrayado— no toda persona mayor de edad es capaz ya que puede presentar alguna de las incapacidades previstas por la legislación vigente.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavala. — Señor presidente: si a raíz de las observaciones hechas por varios señores diputados se resolviera postergar la votación para estudiar otra redacción para el artículo 15, pediría que se contemplara el tema de la capacidad para ser receptor, sobre la que expuse con motivo de la consideración del artículo 13 y a raíz de lo cual el miembro informante de la comisión manifestó que la cuestión estaba contemplada en los capítulos V y VI, en los que sinceramente no la he encontrado.

En cuanto a la observación formulada por el señor diputado Albamonte, creo que ya se ha dado la respuesta técnica. Se puede ser incapaz a pesar de ser mayor de edad. Lo único que me pregunto es qué ha querido decir la comisión al hablar de capacidad. Quizá lo que se haya querido exigir es el discernimiento, punto que también tendrá que ser estudiado cuando se elabore —si así se decide— una redacción definitiva.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. Sureda. — Señor presidente: sólo quiero efectuar una sugerencia pequeña, ya que los puntos fundamentales fueron analizados por los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

En el artículo 16 hay un error de redacción al final del texto: hay una preposición que está mal usada, pues debería reemplazarse la palabra "por", colocándose en su lugar la preposición "de". La redacción sería la siguiente: "Dichos gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño. — Señor presidente: se han formulado varias observaciones, por lo que solicitamos paciencia pues las contestaremos los señores diputados Varela, Armendáriz y quien habla.

Con respecto a la sugerencia del señor diputado Albamonte, de incluir un párrafo en el artículo 16 por el cual las entidades encargadas de la cobertura social y las empresas privadas de medicina prepaga deberán notificar fehacientemente a sus beneficiarios si cubren o no dichos gastos, se acepta la proposición.

También se acepta la del mismo señor diputado con respecto al artículo 17, salvo en lo que atañe a la mención específica al trabajo del dador, pues también puede tratarse de inasistencias en que incurra el dador a su lugar de estudio.

Sr. Ruckauf. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?

Sra. Camaño. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — La comisión no habría aceptado la especificación de inasistencias laborales porque también podrían serlo al lugar de estudio. Pero me permito sugerir que se incorporen ambos conceptos porque todos sabemos que tanto en el ámbito laboral como universitario, una redacción poco clara puede traer dificultades a los dadores.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño. — Aceptamos la observación del señor diputado Ruckauf, por lo que el artículo hará referencia a inasistencias en que incurra el dador a su trabajo y a su lugar de estudio.

Con respecto a la solicitud del señor diputado Argüello, de que se suprima el párrafo que dice: "Esta ablación sólo será permitida cuando la espera de un órgano proveniente de dador cadavérico ponga en peligro grave la salud o la vida del receptor", aceptamos esta propuesta, pero queremos dejar claramente establecido que su inclusión atendía a la defensa firme que deseábamos hacer de la necesidad de una ley que procure solamente órganos cadavéricos.

La Comisión de Asistencia Social y Salud Pública entiende que la procuración de órganos entre vivos es mutilante. No podemos dejar de recordar palabras del doctor Santibáñez cuando concurrió a la comisión, quien comentó que la falta de donantes cadavéricos los había llevado al trasplante de hígados con pacientes no relacionados. Esto es muy frustrante, ya que pone en peligro la vida de una persona sana. Nosotros agregamos que también posibilita el comercio y/o la compra de órganos del enfermo rico al sano pobre.

Si bien aceptamos suprimir ese párrafo del artículo, queremos dejar perfectamente estableci-

do que el espíritu de la iniciativa es posibilitar el trasplante de órganos provenientes de dadores cadavéricos, no dejando de incluir la posibilidad altruista de los familiares directos en la dación.

La observación formulada por el señor diputado López de Zavallía con respecto al segundo párrafo del artículo 18, que contempla el caso del trasplante cardiopulmonar en bloque, será contestada por el señor diputado Armendáriz, y las restantes serán respondidas por el señor diputado Varela.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: hemos escuchado con detenimiento lo expresado por el señor diputado López de Zavallía y coincidimos con su planteo. Nos parece que el receptor de un bloque cardiopulmonar —en lo que se llama una operación dominó— no tiene porqué estar determinando lo que se va a hacer con su corazón; en forma previa, rápida y espontánea tiene que haberlo cedido. Por lo tanto, aceptamos el texto que propuso el señor diputado por Tucumán.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: me voy a referir a dos temas fundamentales; a saber: al planteo formulado por el señor diputado Ortiz Pellegrini, y a la expresión "persona capaz mayor de dieciocho (18) años" que se utiliza en el artículo 15 y que se repite a lo largo de todo el proyecto.

El señor diputado Ortiz Pellegrini observa la parte del artículo 15 que establece que la ablación podrá ser autorizada por una persona que, sin ser cónyuge del receptor, conviva con él en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida, agregando que "Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren nacido hijos". La intención de ambas comisiones es exactamente la que expresa esta disposición en forma literal.

La posibilidad de contraer nuevas nupcias en virtud de la existencia del divorcio vincular no quita que puedan existir personas que vivan en concubinato, expresión que las comisiones no han querido aceptar por considerar que ha caído en desuso y porque todas las normas jurídicas actuales no sólo en la normativa argentina sino en el derecho internacional tratan de soslayarla debido a su carácter agravante para la dignidad de las personas. Así, la comisión ha buscado una expresión que defina la situación de dos

personas que, sin estar casadas, conviven en aparente matrimonio, asimilando de esta forma, a los fines de esta ley, el caso del cónyuge al del denominado concubino.

Asimismo cabe aclarar que el término de tres años no es una arbitrariedad ni fue inventado para esta ley, sino que ha sido recogido de antecedentes jurisprudenciales en materia previsional, que asimilan en algunos supuestos la situación del concubino a la del cónyuge.

Por lo tanto, la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Ortiz Pellegrini.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green. — Señor presidente: escuché las explicaciones del señor diputado Varela sobre la no utilización de la palabra "concubinato" y la elección del concepto de "personas que viven en una relación de tipo conyugal". Por lo que ha dicho, ha querido ponernos en los tiempos modernos y eliminar esa expresión que le parece antigua y acaso discriminatoria.

Poniéndome también en los tiempos modernos, quiero preguntarle si con la expresión "relación de tipo conyugal" el artículo 15 también contempla la situación de convivencia de dos personas del mismo sexo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: es imposible que en una ley se puedan explicitar las distintas situaciones que pueden acontecer; esto queda librado a la interpretación que de la norma jurídica hagan los jueces.

No obstante, como los antecedentes legislativos sirven a ese fin, aclaro al señor diputado Green que esta normativa de ninguna manera se refiere a una unión entre personas de un mismo sexo.

En cuanto al segundo aspecto de las formulaciones realizadas sobre la expresión "persona capaz mayor de dieciocho (18) años", quiero recordar a los señores diputados que éste fue un tema ampliamente debatido en oportunidad del tratamiento anterior de este artículo, que no pudo ser votado por las razones que todos conocemos. La comisión había tomado en cuenta otra redacción gramatical por el inconveniente que planteaba el término "capaz". En razón de ello se definió que debía receptarse la expresión contenida en la ley de 1977 y en la posterior, donde ya se habla de persona capaz mayor de 18 años. Aquí se ha explicitado con suficiente claridad que la intención de la comisión es que

toda persona mayor de 18 años tenga aptitud para autorizar en vida la ablación de un órgano hacia una persona vinculada por un grado de parentesco que prevea la ley.

Sobre el particular quiero recordar que las personas mayores de 18 años son las denominadas incapaces relativos. Es decir que son incapaces pero tienen aptitud para realizar aquellos actos que la ley autoriza expresamente a formular. Esta es la intención querida por el legislador: que toda persona mayor de 18 años, no obstante ser menor de edad, en virtud de esta autorización legal pueda autorizar la ablación de un órgano para ser trasplantado a alguna persona vinculada por un grado de parentesco fijado en el artículo 21.

En cuanto a la denominación "capaz" se ha querido expresar que no obstante tener más de 18 años, la persona no debe estar afectada por ningún otro tipo de incapacidad legal que prevé el Código Civil, como es el caso de los dementes, los sordomudos y otras incapacidades declaradas por la ley. De esta manera queremos dejar perfectamente aclarado el sentido de la expresión "persona capaz mayor de dieciocho (18) años", agregando que la comisión mantendrá la redacción original del proyecto.

Sr. Presidente (Brook). — No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar el título V.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Verdú. — Señor presidente: yo había hecho una observación al penúltimo párrafo del artículo 15 planteando la situación de la persona que se convierte en incapaz. La decisión de donar un órgano puede revocarse en cualquier momento. ¿Cuál es la situación que se da si a ese instante no conserva dicha capacidad?

Me voy a permitir leer el párrafo final que había propuesto al artículo en discusión, el que quedaría redactado de la siguiente manera: "El consentimiento del dador no puede ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no será practicada".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. — Señor presidente: solicité que, en el penúltimo párrafo del artículo

15, luego de "El consentimiento del dador..." se agregue "o su representante"; pero el señor diputado Varela no se expidió con respecto a esta propuesta, por lo cual pido que la comisión aclare si se la acepta o no.

Sr. Presidente (Brook). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Varela. — Señor presidente: la comisión acepta las propuestas formuladas por los señores diputados Ortiz Pellegrini y Verdú, así como también la observación gramatical realizada por la señora diputada Sureda en relación al artículo 16.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar, dejando aclarado que se lo hará sólo por cinco minutos.

Lamentablemente, señores diputados, en estas condiciones no puede seguir sesionando la Cámara.

— Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: se encuentran en las galerías varios padres de niños y adultos que necesitan trasplantes de órganos así como personas trasplantadas. Han llegado aquí dos o tres horas antes de que se iniciara esta sesión. Por ello solicito que la Presidencia arbitre todos los mecanismos que tenga a su alcance a fin de convocar al recinto a todos los señores diputados que están en la casa a fin de que podamos sancionar por completo este proyecto de ley, cuya trascendencia nos obliga a actuar con toda responsabilidad. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green. — Señor presidente: en realidad las expresiones del señor diputado preopinante no tendrían que ser dirigidas a la Presidencia, dado que ella hace todo lo posible para que el quórum se mantenga. Evidentemente, son los señores diputados quienes no asisten al recinto porque no desean hacerlo. Tanto desde la Presidencia como desde los bloques se procura la existencia de condiciones que permitan tratar como corresponde una iniciativa de esta naturaleza. Por ello creo que aquella invocación está mal hecha y que el señor diputado preopinante, como presidente de una de las comisiones intervinientes en el asunto en consideración, debe preocuparse

por que los colegas diputados ausentes concurren al recinto. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Argüello. — Señor presidente: a partir del instante en que el señor presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública solicitó alargar el plazo de convocatoria se hicieron presentes en el recinto nueve señores diputados, y han transcurrido solamente tres o cuatro minutos. Por tal razón quiero hacer más esas palabras y solicitar al cuerpo que extendamos por un poco más el tiempo de llamado a los legisladores que se encuentran en los pasillos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quienes estamos deseosos de que se apruebe este proyecto de ley queremos hacer una invocación a los miembros de las distintas comisiones en el sentido de que abrevien sus exposiciones, es decir que sean más estrictos en materia de tiempo para sus exposiciones, sin perjuicio de que se tomen la total libertad de manifestar todas sus opiniones. Es necesario que pensemos en la dificultad de mantener el quórum, por lo que debemos privilegiar la posibilidad de efectuar las correspondientes votaciones —necesarias para sancionar en el día de hoy esta iniciativa— y no los discursos. Esta es una petición que tiene por objeto que se abrevien las exposiciones de los señores diputados, para poder continuar con el normal desarrollo de la sesión.

Sr. Presidente (Pierri). — De todas formas se procederá a pasar lista, pues es imposible continuar la sesión de esta manera.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Durrieu. — Señor presidente: teniendo en cuenta las dificultades que existen para lograr quórum, propongo que restrinjamos el análisis a aquellas modificaciones que ya han sido acordadas por ambas comisiones, a fin de ahorrarnos únicamente a aquellos artículos en relación con los cuales existen problemas de fondo. De esta manera, es posible que garanticemos la sanción del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: deseo pronunciarme en el sentido exactamente inverso a la señora diputada preopinante, pues lo que debemos agilizar no es el tratamiento del proyecto de ley sino la presencia de los señores diputados en el recinto.

Por otro lado, propongo que la discusión en particular del capítulo VI se realice artículo por

artículo, al igual que la votación, tal como lo determina el artículo 142 del reglamento. Luego, a partir del capítulo VII, continuaríamos con la discusión y votación por capítulo. Formulo esta proposición habida cuenta de que cada uno de los artículos contenidos en el capítulo VI constituye un elemento de debate muy significativo, y varios señores diputados propondremos modificaciones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: desde hace bastante tiempo las comisiones intervinientes en este asunto han venido solicitando su tratamiento por entender que se trata de un tema absolutamente imprescindible para numerosas personas cuya salud y vida dependen de la sanción de este proyecto de ley. Por ello, solicito a la Presidencia que una vez reconstituido el quórum exhorte a los señores diputados a que permanezcan en el recinto a fin de poder continuar con la sesión.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista, registrándose la presencia de 136 señores diputados.

—Se encuentran presentes al pasarse lista los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Achem, Agúndez, Alabi, Albamonte, Alcalá, Algaba, Alsogaray, Alvarez (C. A.), Alvarez Echagüe, Aranda, Argüello, Armendáriz, Baglini, Balestra, Balestrini (A. C.), Barberá, Baum, Baylac, Becerra (N. E.), Beltrán, Bracchi, Branda, Bravo, Brook, Bruzzo, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (E. O.), Camaño (G.), Caputo, Carreras, Ceballos, Cicare, Clérico, Corchuelo Blasco, Cossos Pérez, Costelli, Daud, De Martino, Durrieu, Echevarría, Elías, Estévez Boero, Fajardo, Felgueras, Fellner, Fernández Gill, Ferreyra, Fescina, Figueroa, Folloni, Galván, Gan, García, Gatti, Gauna, Germanó, Golpe, Gómez, Gómez Centurión, González Gass, González (A. I.), González (L. M.), González Gaviola, Green, Guerrero (L. S.), Hernández (A. M.), Herrera (L. F.), Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Koth, Lamberto, López Arias, López de Zavalía, Losada, Loutaif, Maggi, Manfredotti, Marcó, Marelli, Martín de De Nardo, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Mendoza (M.), Meneghini, Molardo, Molinas, Monteverde, Moure, Muniagurria, Natale, Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Parada, Parente, Parola, Pepe, Peralta, Pesce, Pierri, Piotti, Prat, Profili, Ré, Rodríguez (J.), Rodríguez (R. E.), Rodríguez Sañudo, Roig, Roy, Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Salvador, Sánchez Caldeano, Seguí, Solá, Storani, Sucaria, Sureda, Troyano, Uriondo, Valcarcel, Varela, Venesia, Verdú, Zambianchi y Zamora (L. F.).

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo V, que contiene los artículos 14 a 18, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título VI, que incluye los artículos 19 a 26.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: solicito que en este título la discusión y votación se realicen artículo por artículo. Asimismo, que la votación se haga en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento, en el tratamiento de este título se procederá en la forma indicada por el señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 19

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Varela. — Señor presidente: la comisión propondrá modificaciones a los artículos 20, 21 y 22, meramente gramaticales y no sustantivos.

En cuanto a este artículo que tenemos en consideración, se propone la siguiente redacción para el primer párrafo: "Todo funcionario del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará abligado a recabar de las personas capaces mayores de dieciocho (18) años que concurran ante dicho organismo a realizar cualquier trámite, la manifestación de su voluntad de otorgar la autorización a que se refiere el artículo anterior. Dicha manifestación será asentada en el documento nacional de identidad del declarante y se procederá a comunicarla a la autoridad de contralor, dejando en todos los casos clara constancia de las limitaciones especificadas por el interesado".

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Mario Carlos Brook.

Sr. Varela. — La modificación consiste en reemplazar el párrafo "la manifestación de su voluntad positiva o negativa respecto del otor-

gamiento de la autorización a que se refiere el artículo anterior", por otro que diga "la manifestación de su voluntad de otorgar la rior".

autorización a que se refiere el artículo ante-

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavallía. — Señor presidente: voy a mocionar en otro sentido al propuesto por la comisión.

Pienso que si se requiere la manifestación de voluntad, debe también asentarse la voluntad negativa. No es posible que en cada oportunidad en que uno concurra a realizar cualquier trámite se vuelva a ejercer una suerte de presión psicológica pidiendo la declaración de voluntad positiva. Partiendo de la base de que debe asentarse tanto la positiva como la negativa, sugiero un cambio en el orden de los párrafos porque no parece adecuado que para cualquier trámite se requiera esto, si ya está asentada la voluntad en el documento de identidad; y tampoco parece apropiado que sea para cualquier acto sino únicamente para aquellos concernientes al registro de actos de la vida civil, como contraer matrimonio, asentar una partida de nacimiento u obtener en su caso una partida de defunción.

Pero no debe ser para cualquier trámite, porque de ser así, en algunos registros del interior, donde para trámites comunes he notado colas de dos o tres cuadras, se volverá prácticamente imposible su actividad.

Comprendo la preocupación de las comisiones en recabar esta información, pero no exijamos más de lo posible, máxime cuando se ha previsto una sanción de tipo penal para el funcionario que no cumpla con este requisito.

En síntesis, sugiero que se establezca el siguiente orden: en primer lugar, debe figurar el párrafo donde se habla de la manifestación de su voluntad positiva o negativa, respecto del otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo anterior, o su negativa a expresar dicha voluntad, la que deberá ser asentada en el documento nacional de identidad del declarante o en el pasaporte, en su caso. Aquí parece que el recaudo existe únicamente para los que tienen documento nacional de identidad, es decir, para los ciudadanos argentinos. Pero las leyes se dictan para todos los habitantes, y por ello debe preverse también el caso del pasaporte.

Como segundo párrafo, estaría el que ahora es primero: "Todo funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará obligado..."

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. López de Zavallía. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: comparto la preocupación de extender a todos los habitantes del país la norma, pero el pasaporte del extranjero no pasa por las oficinas de nuestro país, o sea que es imposible incluir nada en él. Pienso que el objetivo se cumpliría hablando del documento y de la cédula nacional de identidad, porque el pasaporte lo expiden los consulados extranjeros, es decir que no se podrá disponer de él.

Sr. Varela. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. López de Zavallía. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: pido disculpas por la interrupción, pero el propósito es dinamizar el tratamiento de este proyecto. Hay cuestiones meramente operativas, y es imposible que sean consideradas por la ley. Todas las dificultades que hacen a la ejecución y a la practicidad de este régimen no pueden estar previstas en forma enumerativa por la ley, y por eso la comisión resolvió la cuestión con un párrafo que a mi entender es el más correcto. Se trata del tercer párrafo del artículo 20, que dice: "La reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación, registro y constancia de esa voluntad".

Creemos que con este párrafo, dejando las cosas libradas a la reglamentación, estamos considerando las distintas situaciones de carácter operativo que pueden presentarse con respecto a esta cuestión.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ruckauf. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. López de Zavallía. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: en sentido opuesto al que acaba de formular el distinguido colega preopinante, cuando haga uso de la palabra voy a solicitar que se elimine el tercer párrafo de este artículo.

Creo que hay que colocar la expresión de voluntad sólo en el documento nacional de identidad, porque la posibilidad de fraude se funda en la existencia de más de un documento. Oportunamente voy a solicitar que se sancione una norma de carácter penal para el médico que no tenga el DNI a la vista ni inserto en el expediente. Cualquier banda que se dedique a este tipo de hechos puede aprovechar la ausencia de un solo documento como un elemento para eludir la voluntad del legislador y la justicia.

En consecuencia, tengo una opinión totalmente distinta, pero no por motivos técnicos jurídicos, a la de López de Zavallia, a quien respeto. Creo que tiene que haber un solo documento, sólo el DNI, donde figure el sí o el no. Oportunamente, al hablar sobre este tema, haré otras consideraciones, pero me parece importante acotar ahora este concepto por las opiniones de los señores diputados López de Zavallia y Varrela, ya que sólo tiene que haber un documento donde figure la voluntad del declarante, porque no debemos olvidar que este proyecto se refiere más adelante de la voluntad presunta del donante.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. López de Zavallia. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: coincido con lo que acaba de expresar el señor diputado Ruckauf y como una opinión más quiero señalar que sería interesante que mediante un sistema informático el Registro Nacional de las Personas pudiera evacuar en forma telefónica y rápida la consulta acerca de si la persona que se encuentra internada y no tiene su documento nacional de identidad consigo ha expresado su voluntad en uno u otro sentido.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavallia. — Señor presidente: coincido totalmente en que debe tratarse de un solo documento, pero recuerden que los extranjeros no naturalizados tienen el pasaporte como único documento equivalente.

A eso apunta mi observación, porque en ese caso los extranjeros quedarían fuera del sistema. Creo que de este modo queda aclarada la inquietud y entiendo que hay razones suficientes para recogerla. Pero además del aspecto formal

de dónde se asiente la declaración de voluntad, queda otra observación relativa a cuántas veces sea requerida.

Sostengo que una vez asentada la declaración de voluntad no debe exigirse una nueva respuesta. Esto como primer punto y, en segundo lugar, que tampoco puede exigirse para cualquier trámite, sino para los trámites que atañen a registros vinculados a actos de la vida civil para los cuales el funcionario debe exigir el documento identificatorio.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: volviendo sobre la reflexión a la que aludí hace unos instantes para hacer la aclaración al distinguido señor diputado López de Zavallia, cuya aclaración a la mía comparto en el sentido de que es apropiado que exista un único documento, incluso también para los extranjeros.

En consecuencia, voy a proponer que se suprima el párrafo del artículo 20 que dice: "La reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación, registro y constancia de esa voluntad".

Además, en el artículo alternativo —que solicitaré sea votado en forma nominal— propongo un párrafo final con el siguiente texto: "El jefe del equipo médico o su reemplazante, previstos por el artículo 4º de esta ley, previo al acto de ablación deberá tener ante sí el DNI —o pasaporte, en el caso del extranjero— del occiso y adjuntarlo al expediente judicial. En caso de omisión de esta obligación los citados profesionales serán reprimidos con la pena de prisión prevista por el artículo 29 de esta ley".

Estamos hablando de una norma que en su artículo 61 intenta establecer un mecanismo de donación presunta. Estamos ante la posibilidad de...

Sr. Caputo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Ruckauf. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Caputo. — Señor presidente: simplemente deseo aclarar un concepto. Se ha dicho que los extranjeros no naturalizados carecen de DNI, pero sí lo poseen.

Formulo esta aclaración teniendo en cuenta lo manifestado por el señor diputado Ruckauf. Los extranjeros residentes no naturalizados poseen D.N.I. con la serie de 90 millones.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Antes de redactar en forma definitiva este artículo y a pesar de la renuencia de las comisiones a introducir modificaciones, habría que tener en cuenta lo manifestado por el señor diputado Caputo, y si hay más de un texto propuesto tratar de llegar a un punto de coincidencia.

Se intenta establecer un mecanismo de donación presunta y a pesar de que trata de hacerse en forma dilatada en el tiempo, éste es un plexo normativo que operará durante ese lapso. Por tal motivo debemos contemplar la necesidad de que no haya más de un documento y de que sea clara la obligación de la presencia del DNI —o el documento alternativo que convengamos— al momento de la ablación.

De lo contrario, es posible que el médico que opere haga desaparecer el DNI y que entonces no exista documento alguno. Cada vez que señalo esta posibilidad los colegas diputados que son médicos se ponen nerviosos porque presuponon que pongo en tela de juicio la conducta de dichos profesionales. En este sentido quiero recordar que hay un juez federal que está procesando médicos en Córdoba por acusaciones que el propio magistrado ha hecho públicas, vinculadas con ablaciones de seres vivos. En consecuencia, el delito puede existir. No digo que exista, pero como legisladores tenemos que prever la posibilidad de violación de la ley.

Insisto en que no debe haber más de un documento en el que quede clara la voluntad del ciudadano y además, tal como figura en la redacción que antes cité, en que el médico que no tenga ante sí y acompañe el documento en el expediente deberá sufrir la pena prevista en el artículo 29 para quienes extraen indebidamente órganos y materiales anatómicos. Si un médico lleva a cabo una ablación en una persona que se ha negado oportunamente, y no tiene el documento ante sí, se produce la violación delictiva prevista en el artículo 29.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: si estamos preocupados por este tema —se han dado pruebas reiteradas en tal sentido— significa que la legislación que nos rige en esta materia tiene imperfecciones y limitaciones que es imprescindible modificar para que la situación por la que atraviesan aquellas personas que imperiosamente necesitan un trasplante de órganos sea solucionada. Previendo para el futuro y resguardando los derechos personalísimos y la integridad de la persona humana, resulta necesario

imaginar y plasmar un sistema legal que permita y facilite la ablación e implante de órganos en la República Argentina, a fin de que se consolide y esté a la altura de los más desarrollados e importantes del mundo. Estamos en esta cuestión y esta iniciativa unifica el criterio de todos los legisladores, sin importar el bloque al cual pertenecen.

En este sentido, me parece atinada la redacción que ha sugerido el señor miembro informante de la comisión, señor diputado Varela. Digo esto porque la redacción a la que hemos arribado surge de un intercambio importante de ideas en el plenario de ambas comisiones, en las reuniones de cada una de ellas y en las conversaciones que hemos mantenido los integrantes de dichas comisiones. Nos hemos puesto de acuerdo en la necesidad de no dejar estampada en el documento nacional de identidad la voluntad negativa inicial que puede tener una persona con respecto a ser donante de órganos. Esto está muy relacionado con las leyendas, prejuicios y pésima información que sobre esta materia se ha venido manejando en el país.

A este último aspecto apunta esta legislación cuando plantea la realización de una campaña de esclarecimiento permanente en la opinión pública a los efectos de que la ciudadanía tome debida cuenta de lo que se trata, desalojando de su mente los prejuicios y cargas de todo tipo que han obstaculizado esta cuestión, no sólo en la Argentina sino también en países europeos, que se precian de tener la legislación más avanzada en la materia. Sin embargo, a veces la espera en relación a los órganos más importantes promedia los tres años.

Esto significa que hay una crisis en la oferta de órganos. Se trata de limitar la donación de órganos entre personas vivas, porque esto indudablemente constituye una lesión a la persona viva que posee el órgano, pero se pretende fomentar e incentivar la donación después de la muerte. Por ello es esencial el tercer párrafo de este artículo.

A colación de lo que planteaba el señor diputado por la provincia de Tucumán, cuando sugería que se estampara la voluntad positiva o negativa, personalmente creo que ello no debe ser así. Estoy seguro de ello y coincido con los miembros de la comisión y, especialmente, con su miembro informante, porque una persona puede tener inicialmente una voluntad negativa, pero luego puede cambiar esa decisión. Tiene todo el derecho de hacerlo, ya sea porque esclareció su postura, conoce las bondades del sistema, tiene confianza en él o está convenientemente informada por el Estado sobre sus ventajas.

Entonces, puede cambiar su voluntad y no podemos obligarla a concurrir a un registro del estado civil y capacidad de las personas —que quizás se encuentre a más de 500 kilómetros de su domicilio— para expresar que ha cambiado de idea. Por eso me parece correcto que se elimine el mecanismo de tomar nota de la voluntad negativa. Además, cabe agregar que dejar constancia de la voluntad negativa puede ser utilizado en desmedro de la persona. Sabemos que existen religiones que en esta materia presentan posiciones severas, que personalmente respeto y que podrían verse afectadas o discriminadas si las obligamos a pronunciarse en tal sentido.

Por todo lo expuesto me parece bien la redacción utilizada por la comisión, ya que ha sido el fruto de un importante y extenso debate. Todos estos factores se pusieron en juego para elaborar la redacción propuesta.

Por otro lado, entiendo las dificultades por las que seguramente atravesarán los ciudadanos que concurran a los registros civiles y sean requeridos sobre la manifestación expresa de su voluntad cuando realicen un trámite. Este no es un problema de hacer colas, sino de un déficit en la oferta de órganos. Se trata de que no estamos en condiciones de abastecer los requerimientos que se presentan todos los días. Falta una conciencia sobre el tema, que tenemos que lograr entre todos, plasmando fundamentalmente una legislación que apunte a concientizar a nuestra gente sobre la necesidad de participar activamente en la implementación de esta iniciativa. A mi criterio, esto no se soluciona con la donación presunta directamente explicitada en la ley o mediante el subterfugio que ahora se propone en el artículo 61. Esto será motivo de una intervención específica sobre el particular. Pero sí me parece que debemos ampliar las posibilidades de que el ciudadano sea requerido sobre su intención de ser donante de órganos todas las veces que sea necesario, y considero adecuada la forma en que está redactado el artículo.

Por último, quería decir que cuando había dos despachos —ninguno de los cuales, como es de conocimiento de la Cámara, alcanzó la mayoría— la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública proponía un universo de documentos en los que podía estar estampada la voluntad de ser donante de órganos. Cuando analizamos este tema, llegamos a coincidir en que no podía habilitarse cualquier documento para plasmar esta voluntad, de modo que la solución elegida fue objeto de consenso. Por eso considero que

debe ratificarse este artículo tal cual ha sido referido y en tal sentido voy a expresar mi voto en la oportunidad pertinente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Brook).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia.— Señor presidente: si el espíritu de este artículo es crear en la población una conciencia solidaria en la materia, el cuarto párrafo debería ser el que encabece la norma, ya que dice: “El Poder Ejecutivo realizará en forma permanente una adecuada campaña educativa e informativa a través de los medios de difusión masiva, tendientes a crear la conciencia solidaria de la población en esta materia.”

Tal como está ordenado este artículo, da la impresión de que el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas se convierte en un funcionario policial que interroga a las personas que concurren a hacer un trámite sobre su voluntad de hacer o de no hacer, que es un derecho absolutamente personalísimo protegido por nuestra Constitución.

El funcionario, o mejor dicho el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, debería llevar un registro de la voluntad de las personas que concurran a realizar un trámite y expresen su voluntad. Tal voluntad será positiva en el caso de que la campaña de concientización realizada por el Poder Ejecutivo y las instituciones interesadas tenga éxito, y será negativa si dicha campaña no tiene ningún impacto; o bien puede ocurrir que no se expresen en absoluto.

Entonces, formulo moción de que el artículo 20 se reordene de manera que esté encabezado por el cuarto párrafo del actual texto, y de que se adopte la siguiente redacción para el que sería segundo párrafo —en lugar de la del primer párrafo actual—: “Las oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas llevarán registro de las personas capaces mayores de dieciocho (18) años que concurran ante dicho organismo a manifestar su voluntad de prestar la autorización a la que se refiere el artículo anterior”. Las oficinas del Registro se ocuparán entonces de esto y no de interrogar al estilo policial a las personas sobre si quieren o no quieren donar sus órganos. Si las personas voluntariamente desean manifestar su intención en este sentido, la oficina tomará nota de ello.

Sr. Presidente (Brook)— Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Seguí.— Señor presidente: si fuéramos un órgano legislativo del Primer Mundo, posi-

blemente formularíamos este artículo con toda amplitud, porque el espíritu de la disposición es sumar el mayor número posible de adherentes a un sistema que queremos que se difunda por todo el país.

Creo que sería suficiente con que la norma dijera que cualquier instrumento público que acredite la identidad de una persona pueda servir para consignar la voluntad del donante. Digo esto porque no solamente hay DNI circulando por el país; también hay libretas de enroalamiento, libretas cívicas, libretas de extranjerías en algunos municipios y cédulas de identidad federales y provinciales. Hay gente que vive años y años con el mismo documento y no concurre a ninguna oficina pública para reemplazarlo por el DNI.

Por lo tanto, sería mucho más razonable que a través de una gran campaña de difusión se instruyera a todas las oficinas públicas provinciales o nacionales donde se expiden documentos, inclusive el registro de conductor, para que las personas que concurren a ellas, llenen los formularios y registren su voluntad en un nomenclador central que constará en el organismo que controla el estado civil y la capacidad de las personas. Esto significa que cualquier documento que identifique a una persona será apto para registrar la voluntad expresa del ciudadano. De esta manera estaríamos obrando con cierta amplitud, y podríamos concretar el pensamiento de los legisladores que tiene por finalidad permitir que los ciudadanos puedan ayudar a sus congéneres lo antes posible.

Sr. Presidente (Brook).— Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos.— Señor presidente: en este artículo existe la intención concreta de abordar una problemática que obviamente ha tenido un desarrollo, tanto en lo científico como en lo cultural —me refiero al cambio de opinión de las personas—, que se vincula con la matriz educativa de los pueblos.

Creo que las leyes intentan cambiar, en algunos casos, las realidades, pero éstas no siempre pueden modificarse desde la legislación. En este sentido, nos equivocáramos si creyésemos que una vez aprobada esta iniciativa por el Congreso de la Nación, la problemática de la falta de donantes de órganos quedaría resuelta. Esta última obedece —como aquí se ha dicho— a los prejuicios, a la pésima información y también a la falta de conciencia cultural y educativa de nuestro pueblo.

Por eso coincido con la primera parte de la exposición del señor diputado Ibarbia, en cuanto a la necesidad de que este artículo tenga como objetivo fundamental la información y la formación de la conciencia pública acerca de la necesidad de la donación de órganos.

Por lo dicho, voy a proponer que el cuarto párrafo del artículo 20 pase a ser el primero. Además, voy a sugerir a la comisión la siguiente incorporación. Donde dice: "el Poder Ejecutivo realizará en forma permanente una adecuada campaña educativa e informativa a través de los medios de difusión masiva..." propongo que se agregue: "...e implementará medidas tendientes a establecer el estudio de esta temática en los programas del ciclo educativo de cumplimiento obligatorio". También sugiero que a continuación de la frase: "...tendientes a crear la conciencia solidaria de la población en esta materia" se agregue: "...y difundir el conocimiento de la legislación respectiva vigente".

Si bien ningún ciudadano puede aducir el desconocimiento de la ley, esta norma abordará la donación presunta de órganos y somos absolutamente conscientes...

Sr. Albamonte.— ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Ceballos.— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.— Señor presidente: comparto absolutamente lo manifestado por el señor diputado preopinante en cuanto a que no hay norma que por sí sola modifique la cultura de un pueblo, porque para que ello ocurra se requiere de la educación como elemento fundamental.

No obstante, deseo hacer un llamado a todos los señores diputados, porque en este momento se encuentran presentes en el recinto sólo 99 legisladores y tengo el temor de que nuevamente se postergue la sanción de esta norma. Entonces todo lo que podamos decir para cambiar un sistema cultural, que muchas veces es absolutamente individualista y egoísta, por otro más solidario, será en vano si no avanzamos en el tratamiento en particular del proyecto. Estoy de acuerdo con el señor diputado Ruckauf, en cuanto a que la consideración se realice artículo por artículo y modifiquemos todo lo que sea necesario, y me complace la actitud de la comisión que con un espíritu humilde y abierto acepta las propuestas que se realizan. Por ello, no quisiera que la sociedad interpretara una postergación de esta sanción como una señal de

que a esta Cámara de Diputados, no le interesa la ley de trasplantes. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: más allá que desde el punto de vista jurídico nadie puede desconocer la legislación vigente, todos somos conscientes de que existen distintos niveles de conocimiento de ella, que tienen una relación directamente proporcional con el grado de formación e información de las personas.

Además, teniendo en cuenta la descentralización del sistema educativo, mi propuesta es que en lugar de utilizar la expresión "impondrá en los programas de estudio" se diga "implementará medidas tendientes", ya que la responsabilidad de la prestación del ciclo educativo obligatorio recaerá en las provincias. Parece importante que este cambio de la matriz cultural en la Argentina comience con la formación que nuestros niños y jóvenes reciben en el ciclo educativo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Echevarría. — Señor presidente: considero que la única constancia que la familia tendrá sobre la intención del fallecido en el sentido de no donar sus órganos será la manifestación que es asentará en el DNI.

Como el artículo 61 presume que a partir del 1º de enero de 1996 todos son donantes, quedarán como tales aquellas personas que no teniendo la intención de donar sus órganos no hayan manifestado esta decisión en ningún documento de identidad. Por ello, solicito a la comisión que no permita que el artículo 20 sea votado tal cual está redactado.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: volveré sobre un tema que no quiero dejar pasar porque me parece que podría tener distintas interpretaciones —no para quienes hoy estamos debatiendo este proyecto sino para el futuro—, en la seguridad de que esta iniciativa tendrá sanción con modificaciones y merecerá un análisis profundo.

Me refiero al tema de los documentos, sobre el cual aquí se ha dicho tangencialmente que puede tratarse del DNI o, en su defecto, del pasaporte. Pienso que la libreta de enrolamiento, la libreta cívica y el DNI son los únicos documentos donde se puede asentar la manifestación de voluntad por la afirmativa o negativa, respecto del requerimiento de la autoridad competente que establece el artículo. El pasaporte sólo serviría para los extranjeros no nacionali-

zados ni radicados en la Argentina, es decir, para los extranjeros en tránsito. Sé que no es la voluntad de los legisladores hacer esta referencia, por lo que quiero dejar la debida constancia en el Diario de Sesiones de esta observación, pues si no se podría interpretar que estaríamos aplicando la presente norma a quienes podrían estar circunstancialmente en la Argentina, de visita.

Por lo tanto, si hay gente indocumentada en nuestro país —residente en forma ilegal— su único documento sería el pasaporte y de ninguna manera se le podría aplicar esta legislación que pretendemos aprobar. Los extranjeros con radicación en la Argentina o nacionalizados tienen DNI y los argentinos nativos tienen, en su defecto, libreta de enrolamiento o cívica.

No quería dejar pasar la oportunidad de hacer esta observación sobre el pasaporte, en aras de respetar el espíritu que ha guiado a los señores legisladores, dado que esta redacción se podría prestar a malos entendidos con gravísimas consecuencias. En efecto, esto podría dar lugar a una información distorsionada al turismo en la Argentina o bien a tantas otras cuestiones...

Sr. Ruckauf. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Losada. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: simplemente quería expresar que coincido con los argumentos vertidos por el señor diputado que está en el uso de la palabra y que la redacción sólo debe mencionar el DNI.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: con esta aclaración quería dejar asentada mi posición en el sentido de que de ninguna manera se puede expresar la voluntad en cada uno de los documentos. La autoridad competente debe tener un solo documento de referencia.

Por lo expuesto, a continuación de donde dice: "...autorización a que se refiere el artículo anterior, o su negativa a expresar dicha voluntad..." debe agregarse: "en el DNI, libreta de enrolamiento o libreta cívica".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. — Señor presidente: coincido con la observación formulada por el señor diputado Echevarría hace unos momentos. Quisiera que

la comisión o por lo menos el señor diputado Varela —que ha estado interviniendo en su nombre— clarificara si la exclusión de la manifestación de voluntad negativa implica anticiparse al rechazo del artículo 61. La inexistencia de la manifestación de voluntad negativa operaría juntamente con el artículo que he citado, que contempla la posibilidad del donante presunto. En consecuencia, debe quedar perfectamente claro que el artículo 20 no puede diferenciarse del artículo 61 desde el punto de vista de su tratamiento. En el caso de que no se estableciera el consentimiento presunto, comparto que resulta inconveniente asentar la manifestación de voluntad negativa; pero si se determina aquel consentimiento, debe existir la posibilidad de que la manifestación de voluntad negativa quede asentada en el documento nacional de identidad.

Aquí se ha hecho referencia a que el DNI debe ser el único documento que acredite la voluntad expresa del donante; pero de ninguna manera pueden excluirse a las tarjetas que suministra el Incucai, en las que constan manifestaciones expresas de voluntad para la donación de órganos. En el caso de llegarse a interpretar que la forma de asentamiento debe operar única e ineludiblemente en el DNI —excluyendo de esa manera otra forma de manifestación de voluntad—, estaríamos provocando un efecto contrario al que se desea por medio de este proyecto de ley, y más que facilitar el acceso al implante de órganos estaríamos retaceándolo.

Sr. Crostelli. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Brook). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Crostelli. — Señor presidente: si bien comparto que el documento debe ser único, entiendo que además debe existir un registro también único, pues las personas no siempre llevan en su poder todos los documentos, y menos aún el DNI, dado que en general se manejan con la cédula de identidad.

Por otra parte, en otro de los artículos se otorga un plazo perentorio al juez para determinar si se puede proceder o no a la ablación en los casos de muerte natural, accidental o violenta. Justamente en estos supuestos es donde el juez tendría que recabar información de ese único organismo a efectos de conocer la voluntad de la persona de que se trate.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra la señora diputada por Formosa.

Sra. Martín de De Nardo. — Señor presidente: el artículo 20 del proyecto de ley importa una modificación sustancial al régimen vigente de la

ley 21.541 y sus modificatorias, especialmente de su artículo 17. Entiendo que el debate a que esta norma ha dado lugar ha mezclado tres circunstancias o hechos perfectamente individuales y distintos.

En primer lugar, uno de los aspectos reside en la conciencia o cultura solidarias del pueblo, favorables a la donación de órganos. En tal sentido, a la campaña de difusión que prevé la norma pueden agregarse las propuestas formuladas por el señor diputado Ceballos, que en nada cambiarían el espíritu de la ley.

En segundo término, se discute acerca de cuáles funcionarios públicos deben recabar la manifestación de voluntad. De conformidad con la legislación vigente, la autorización para la donación de órganos puede realizarse ante cualquier funcionario público; incluso, en la norma se prevé la posibilidad de efectuarse la donación por carta documento o telegrama.

La redacción propuesta, de poner en cabeza de los delegados del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas la obligación de recibir la manifestación de voluntad, aparece a primera vista como restringiendo la posibilidad de recibir donaciones. Pero esto, en realidad, constituye un mecanismo que pone orden en el tema de la donación de órganos.

Actualmente, en nuestro país, quienes deseen donar sus órganos no saben dónde dirigirse, a no ser que se trate del Incucai. En consecuencia, lo que se dice en el artículo 20 no va a restringir las donaciones sino que las va a facilitar. En primer lugar, porque brindará seguridad al donante, a sus familiares y al médico que realice la intervención quirúrgica porque el documento nacional de identidad es el que todo ciudadano generalmente tiene a mano.

En segundo lugar, porque el hecho de que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas tenga delegaciones en todo el territorio nacional también facilita la operatoria, amén de que el Incucai deberá relacionarse con un solo ente; en este caso, con dicho Registro.

Por otra parte, el señor diputado Ruckauf propone eliminar un párrafo que ya estaba previsto en el artículo 17. La comisión consideró necesario mantenerlo en orden a lo establecido en otras provincias, donde ya está instrumentada la expresión de voluntad en otro tipo de documentos, como ser la licencia de conducir. Pero en lo personal coincido con el señor diputado Ruckauf en cuanto a que debe ser uno solo el documento donde quede exteriorizada la manifestación de voluntad del donante, porque hace a la seguridad y facilidad del trámite.

Reitero que lejos de limitar la donación, la facilita, porque es indudable que alguna vez todos pasamos por el Registro Civil, y la obligación de los delegados del Registro Civil de requerir la expresión de voluntad de una persona no será reiterativa, como alguien ha expresado en este recinto. Expresada la voluntad, el delegado del Registro Civil no volverá a indagar sobre la intención de una persona. Quien haya cambiado de opinión deberá revocar expresamente su manifestación de voluntad.

En consecuencia, comparto la redacción con la modificación propuesta por el señor diputado Ruckauf, de eliminar la posibilidad de que se instrumenten otras formas de manifestación de voluntad. El hecho de que se oriente a los donantes hacia un solo organismo otorga mayor seguridad y facilita las campañas educativas que siempre se hacen en la materia; sin perjuicio naturalmente de que el Incucai también pueda recibir una donación en forma directa o que, como aquí se dijo, los establecimientos asistenciales puedan actuar como delegaciones de dicho organismo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: estamos frente a un tema realmente extenso, de manera que solicito disculpas a los señores diputados por detenerme en estos aspectos que hacen al corazón del proyecto en tratamiento. No en vano se han formulado observaciones e inquietudes tendientes a mejorar el contenido de este artículo 20.

Lo primero que deseo dejar en claro es que la comisión ha tenido siempre un espíritu de apertura respecto de todas las inquietudes que hacen a un mejoramiento de esta ley, porque entendemos que toda norma es perfectible y que, más allá del trabajo que hayamos realizado en el seno de las comisiones, pueden surgir aportes de importancia para el objetivo que todos nosotros queremos.

El artículo 20 constituye uno de los temas más debatidos en el ámbito de ambas comisiones. Fue modificado en sucesivas oportunidades y fueron consideradas numerosas inquietudes y objeciones a la redacción original.

Dentro de las opiniones vertidas en el recinto, se podrá apreciar que algunas restringen aún más la norma y otras la hacen más amplia y extensiva. Los señores diputados Losada, Ruckauf y López de Zavalia consideran que esta disposición pone en peligro la necesaria seguridad, por parte de quienes van a ser donantes cadavéricos, de la existencia real de la voluntad de donar sus órganos; también limitan al documento nacional

de identidad como al único documento en el cual debe quedar constancia de la voluntad expresada por el posible donante.

Otros diputados, como el señor diputado Seguí, consideran que la posibilidad de que quede asentada la voluntad del posible donante debe extenderse a otros documentos, como la licencia de conductor o el pasaporte.

En este abanico de opiniones tuvo que moverse la comisión para lograr una síntesis que permitiera considerar las inquietudes que hacen a dos cuestiones fundamentales de la ley: la necesidad de contar con la mayor cantidad de órganos posible y a la vez la suficiente seguridad para evitar cualquier tipo de maniobra que tienda a burlar la voluntad de las personas o que posibilite el tráfico y la comercialización de órganos.

No resulta sencillo sintetizar estas cuestiones en una norma, porque son muchas las alternativas que la vida plantea sobre este particular. Por eso quiero destacar que esta disposición no tiene que ser considerada como un artículo aislado del resto de la normativa, que se relaciona necesariamente con este artículo y prevé todos los mecanismos tendientes, por un lado, a conseguir la mayor cantidad de órganos y, por el otro, a dar las garantías necesarias para evitar burlas a la voluntad de los ciudadanos.

Este artículo prevé dos situaciones: el consentimiento del causante para que luego de su muerte se practique la ablación, y el consentimiento de la familia en el supuesto de la inexistencia de esa autorización.

Otra de las inquietudes que he escuchado por parte de los señores diputados preopinantes es la que se refiere al artículo 61, donde se prevé con aplicación diferida el consentimiento presunto.

En este punto es necesario que me detenga, porque de su comprensión surgirá el trámite que merezcan los artículos 21, 22 y 23 del proyecto.

El articulado de esta iniciativa está elaborado en función exclusiva del consentimiento expreso; es decir, la operatividad de esta normativa y los artículos concordantes están redactados en función de los preceptos contenidos en los artículos 19 y 20.

Ahora bien, una vez aprobado el artículo 61 carecerá de operatividad real, por cuanto su aplicación sólo será posible a partir del 1º de enero de 1996, y aun así se trata de un artículo condicionado a lo que expresa su segundo párrafo.

Lo que quiero significar es que en la hipótesis de que fuese aprobado, en que se den las

condiciones establecidas en su segundo párrafo y que sea operativo a partir de su puesta en vigencia, necesariamente tendrán que ser modificados los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y otros, porque de lo contrario se crearía una incongruencia jurídica que tornaría impracticable la aplicación del artículo 61.

Consecuentemente, la lectura de la norma no debe ser hecha en función de lo que establece el artículo 61, cuya aplicación es diferida, sino en función de lo que dicen los artículos 19 y 20. De allí pueden surgir las observaciones que tengan que hacer los señores diputados, pero jamás se la puede relacionar con un artículo cuya aplicación no es inmediata y cuya operatividad no es posible en este momento.

Hecha esta salvedad, paso a concretar mi punto de vista con relación a algunas observaciones que se han formulado al artículo en debate. Muchas han sido las inquietudes y sugerencias tendientes a su mejoramiento, algunas de las cuales compartimos, pero es necesario destacar que es imposible contener en el artículo legal los distintos supuestos que pueden vincularse a la campaña educativa y formativa que debe realizar el Poder Ejecutivo a través de los medios de difusión para crear una conciencia solidaria de la población en esta materia.

Se pueden brindar innumerables ideas sobre el contenido de esta campaña, que comprendo no sólo a los medios de difusión sino al ámbito educativo y cultural y a los distintos aspectos que se relacionan con la vida de la sociedad. Esto es imposible de prever en la norma y es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, que deberá proceder en su consecuencia a través del decreto reglamentario o directamente a partir de la ejecución de la norma legal.

Sr. Marcó. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. — Señor presidente: lamento llevar un poco hacia atrás la ordenada y sistemática exposición del señor diputado Varela, pero me parece importante profundizar la vinculación existente entre el artículo que estamos tratando y el 61.

La hipótesis del segundo párrafo del artículo 61, que sujeta la vigencia del consentimiento presunto a que el 70 por ciento de los ciudadanos hayan sido consultados, no se podrá concretar nunca si las negativas no son asentadas.

Para poder verificar si todos han sido consultados deben asentarse las posturas negativas y las positivas.

Por ello no es una buena técnica legislativa establecer una norma a futuro y más aún legislar para que, cuando ese futuro se dé, la norma que ahora estamos sancionando ya no tenga operatividad, porque estaría incurriendo en una gran contradicción en sus propios términos.

Por tal motivo, debe quedar en claro el tratamiento que dispensaremos al artículo 61 en forma simultánea con los que estamos analizando, porque podríamos llegar a sancionar aspectos contradictorios con nuestra verdadera intención. Debemos proceder en forma distinta según se decida aprobar el artículo 61 y establecer su futura operatividad o rechazarlo. En el primer caso deberíamos legislar de modo tal de facilitar que se cumplan los supuestos para que entre en operación el mecanismo del consentimiento presunto. Se trata de una cuestión de fondo que hay que establecer antes de avanzar en el análisis del articulado.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: necesariamente deberemos volver hacia atrás. Hay dos cosas que son absolutamente opuestas: el consentimiento expreso y el consentimiento presunto. Es imposible legislar sobre el conjunto del articulado en función de ambos, porque son totalmente distintos.

La norma está elaborada en función de lo que es operativo, es decir, del consentimiento expreso. Por eso se hace la salvedad de que en la hipótesis de la vigencia de la aplicación del artículo 61 —dentro de tres años— será necesaria la modificación de algunos artículos cuya redacción definitiva no podemos dar hoy, porque el mecanismo del consentimiento presunto todavía no es aplicable.

En oportunidad del tratamiento del artículo 61, y según sea la resultante del resto del articulado, podremos responder a las observaciones que bien ha planteado sobre esta cuestión el señor diputado Marcó.

Sr. Echevarría. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Echevarría. — Señor presidente: en el artículo 21 se hace referencia a las personas que pueden dar su autorización para que los órganos

de un fallecido sean donados. Si me niego expresamente a donar mis órganos y no lo tengo anotado en ningún lado, esas personas podrán autorizar la ablación pese a mi negativa. Por eso creo que en algún lado tiene que quedar anotada la negación del presunto donante.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — No he llegado a ese punto; dentro de unos minutos me referiré al particular.

En cuanto a la campaña informativa y educativa tendiente a obtener la mayor cantidad de órganos posibles y a crear una conciencia solidaria en nuestra sociedad, la comisión considera que está suficientemente explicitada en el cuarto párrafo de este artículo, que establece que el Poder Ejecutivo realizará en forma permanente una adecuada campaña educativa —que puede abarcar, obviamente, a los niveles primario y secundario, a las universidades, a los centros culturales y vecinales, etcétera— e informativa a través de los medios de difusión masiva, tendientes a crear la conciencia solidaria de la población en esta materia.

Por tal motivo, la comisión no acepta las propuestas de modificación vinculadas con este punto.

En cuanto al otro aspecto que es materia de inquietud por parte de los señores diputados...

Sr. Ceballos. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: más allá del legítimo derecho de la comisión de aceptar o no las modificaciones propuestas, y de la Honorable Cámara de votar en consecuencia las de la comisión, deseo señalar que, tal como está redactado el párrafo al que acaba de referirse el señor diputado Varela, la campaña educativa e informativa se realizará solamente a través de los medios de comunicación, con lo cual el Poder Ejecutivo nacional no estaría, de atenernos expresamente al mandato de esta norma, autorizado a realizar campañas de información por intermedio de los programas de los distintos Ciclos educativos. Quería hacer esta aclaración para reafirmar el sentido de la propuesta y del voto posterior.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: quiero responder al señor diputado preopinante. Expresé que

compartíamos totalmente las sugerencias realizadas por el señor diputado. Creemos que el aporte que realiza es realmente necesario para clarificar este tema de la donación de órganos.

Lo que sucede es que si incurriéramos en el error de realizar una enumeración de las distintas actividades que tendría que desplegar el poder administrador por intermedio de sus órganos competentes —en este caso, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, la Subsecretaría de Salud Pública de la Nación, el Incucai, que es el órgano de aplicación, y sus distintas delegaciones regionales—, por más amplia que ella sea, necesariamente siempre resultaría incompleta.

Por otra parte, esto está previsto en el artículo 44, que se refiere a las funciones, deberes y derechos del Incucai. Allí se expresa claramente que debe realizar todo este tipo de actividades a las que hemos hecho referencia anteriormente.

Sra. Sureda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. Sureda. — Señor presidente: continuando con el mismo razonamiento del señor diputado Ceballos, perfeccionaríamos este artículo si elimináramos precisamente lo que lo acota, que es su referencia a los medios de difusión masiva. Lo importante es resaltar que el Poder Ejecutivo realizará en forma permanente una adecuada campaña educativa y formativa. No debemos limitarlo a utilizar los medios de difusión masiva. Si no colocamos esa referencia, quedaría comprendida la difusión por medio de la enseñanza obligatoria y las campañas de los distintos institutos del servicio educativo nacional.

Sería prudente modificar el artículo de esta forma. Con respecto a la palabra "tendientes", si se acepta esta modificación, debería figurar en singular y no en plural.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ruckauf. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: si bien no corresponde personalizar los diálogos en la Cámara, quisiera solicitar al señor diputado Varela, que es un hombre estudioso, que reflexionemos juntos sobre una de sus aseveraciones.

El señor diputado Varela ha afirmado que en la redacción de estos artículos no podemos tener en cuenta el artículo 61, porque va a entrar en vigencia dentro de tres años. Sin embargo, el punto es que lo hará sin actividad del legislador. Cuando analizamos esta norma presuponemos la aprobación del artículo 61, que va a regir por decisión del Poder Ejecutivo y no por una decisión del Parlamento argentino. Por ello nos vemos obligados a discutir estos artículos como si el 61 estuviera vigente, ya que cuando lo esté, nos vamos a encontrar con que faltan estos elementos que el propio señor diputado Varela admite que serán necesarios cuando rija el artículo 61.

Si no existiera el artículo 61, como dijo el señor diputado Marcó, no me preocuparía por esta redacción y votaría esta iniciativa a libro cerrado. Lo que ocurre es que hablamos de un proyecto que en un determinado momento establecerá la donación presunta. Entonces, nos vemos obligados a pedir a la comisión que reflexione sobre este artículo y las propuestas que hemos hecho, porque si la comisión mantuviera un dictamen de estas características, estaríamos obligados necesariamente a votar en contra del artículo 61. No hay ningún otro camino posible para nosotros, los que estamos preocupados por lo que implicará la donación presunta en el futuro. No podemos aceptar un texto legal que, como el que plantea la comisión, admite este tipo de huecos legislativos.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Parente. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: quiero recordar que el documento de trabajo que obra en las bancas, titulado: "Texto consensuado por las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General del proyecto de ley sobre trasplante de órganos y material anatómico", fue firmado en la última reunión de la Honorable Cámara. Atento a lo expresado en mi anterior intervención, quiero decir expresamente que en su oportunidad me voy a oponer al artículo 61. Esta oposición fue reiteradamente planteada en las diferentes ocasiones en que discutimos este tema con los miembros de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública.

El hecho de que figure nuestra firma al pie del citado documento debe interpretarse como un aporte a la celeridad en el tratamiento de este proyecto, sobre cuya urgencia coincidimos. Pero de ninguna manera significa un asentimiento absoluto a todos y cada uno de los artículos que contiene.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Varela. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: creo que en las palabras del señor diputado Ruckauf está no el consentimiento presunto sino la presunción de que el artículo 61 va a ser votado favorablemente. Me interesa muchísimo — como creo que a todos — que se sancione este proyecto, y pienso que el escollo que nos tiene estancados desde hace un largo rato es el artículo 61.

Me voy a permitir preguntar, a modo de sugerencia, si tal vez no sería mucho más práctico a los efectos de acelerar la sanción de esta iniciativa que mediante una resolución de la Cámara modifiquemos el orden de la votación de modo de votar primero el artículo 61. Si el artículo 61 es aprobado, el debate es uno; si el artículo 61 no es aprobado, el debate es otro, pero en ambos casos vamos a tener ley. Lo que me preocupa es que no podamos tener ley. Me parece entonces que debemos sincerarnos y darnos cuenta de que lo que nos estanca es el artículo 61. Lo mejor sería formular una moción para modificar el orden de la votación, lo que es absolutamente reglamentario; o sea, votar en primer término el artículo 61 y a partir de ahí continuar con un debate sobre cuyo final tenemos certeza.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán, aclarando la Presidencia que han solicitado interrupciones el señor diputado Algaba y la señora diputada Camaño.

Sr. Varela. — Señor presidente: la comisión acepta la sugerencia formulada por el señor diputado Albamonte, si la Cámara así lo resuelve, en cuanto a tratar, en primer término, el artículo 61 y luego continuar con los restantes artículos, por las razones que él mismo señaló.

Sr. Presidente (Brook). — La votación de esa moción implicaría la necesidad de tener quórum,

sin perjuicio de lo que podemos observar en este recinto, quiero señalar a los señores diputados que se está llamando a votar desde hace 25 minutos y que, lejos de aumentar la cantidad de diputados presentes en el recinto, va disminuyendo cada vez más.

Sr. Varela. — Señor presidente: desearía concluir con un punto fundamental que se estaba debatiendo, que no tiene una vinculación directa con el artículo 61, para luego conceder todas las interrupciones que se me han solicitado.

Sr. Presidente (Brook). — La Presidencia informa al señor diputado Varela que también le ha solicitado una interrupción el señor diputado Carreras.

Sr. Varela. — Con todo gusto se la concederé luego de que termine de exponer sobre este punto referido al D. N. I. y a la inserción de la autorización expresa.

Al respecto decía que el corazón de esta norma es, precisamente el artículo 20. Esto es así, porque del resultado final de este artículo habremos o no coincidido con el espíritu que hemos tenido en ambas comisiones acerca del tratamiento de este asunto. Anteriormente había sostenido que la intención querida por el legislador era conseguir la mayor cantidad posible de órganos cadavéricos sin violentar moralmente a las personas y sin dejar de considerar los márgenes de seguridad necesarios que se deben tener en cuenta para evitar su comercialización o tráfico.

Por esta razón es que el artículo 20 dice expresamente, que todo funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará obligado a recabar la autorización a los ciudadanos que allí concurren. Tal autorización estará inserta en el D. N. I.

A continuación se manifiesta: "La reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación, registro y constancia de esa voluntad". Sobre este aspecto se han formulado dos observaciones en términos generales. La primera es referente a si el documento único exclusivo y excluyente es o no el D. N. I. En este sentido, la comisión expresa lo siguiente: en el párrafo segundo se establece que dicha manifestación será asentada en el documento nacional de identidad del declarante, sin mencionar ningún otro tipo de documento.

Al expresarse que la reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación, registro y constancia de esa voluntad, se refiere a las distintas cuestiones operativas que puede implementar el Poder Ejecutivo en el mismo ámbito o en otros, tendien-

tes a registrar la voluntad afirmativa en el documento nacional de identidad.

El párrafo que acabo de mencionar debe conjugarse necesariamente con el artículo 44, que entre las atribuciones y deberes del Inecui incluye que debe llevar un registro absoluto de todos los donantes existentes en el país. Es decir, que la reglamentación debe prever la forma de comunicación a la autoridad de contralor de todos los donantes existentes en el país y de aquellos cuya voluntad haya sido asentada en el D. N. I.

Aclarada esta cuestión, y una vez considerado el tema del artículo 61, la comisión no va a aceptar las modificaciones propuestas respecto de la ampliación de los tipos de documentos en donde puede ser asentada la voluntad afirmativa de los posibles donantes cadavéricos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Algaba. — Señor presidente: ya se ha adelantado la voluntad de votar negativamente el artículo 61, pero creo que la propuesta formulada por el señor diputado Albamonte cambia totalmente el eje del debate.

Si el consentimiento presunto no va a ser incluido en esta reforma, no tiene ningún sentido derogar la norma vigente e introducir un híbrido que no aportará absolutamente nada. Digo esto con todo el respeto que me merecen los señores diputados Argüello y Varela, de quienes sé que jurídicamente han trabajado en forma minuciosa para modificar artículos que si bien son sustanciales no cambian el espíritu de la ley. Esto sólo se logrará a través de la inclusión de consentimiento presunto, por lo cual concreto mi proposición en el sentido de que se pase a votar el artículo 61 para saber de qué vamos a hablar de ahora en más.

Sr. Presidente (Brook). — Si la formulación del señor diputado por Santa Fe es como moción de orden, la Presidencia se vería obligada a someterla de inmediato a votación...

Sr. Algaba. — En ese caso, la retiro como tal.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño. — Señor presidente: lamento que estemos detenidos en este título referido a los actos de disposición de órganos o materiales anatómicos cadavéricos, y remarco este último término. ¡Nos detenemos a analizar cómo vamos a defender los derechos de los cadáveres cuando no hicimos lo mismo al analizar el título referido a los actos de disposición de órganos o materiales anatómicos provenientes de personas!

El quid de la cuestión no pasa por la cantidad de documentos que podamos tener los argentinos sino por el sentimiento de solidaridad que podamos tener los vivos para cuando seamos cadáveres.

La norma que actualmente rige la actividad trasplantológica determina que los funcionarios deben interrogar a las personas acerca de su voluntad de ser donantes cuando se transformen en cadáveres. Pero la realidad nos indica que ellos no lo hacen, que la gente no expresa su voluntad y que hay personas que para poder orinar deben ser atadas tres veces por semana a una máquina. La realidad también nos indica que la ciencia está avanzando a pasos mucho más agigantados que los legisladores. Por ello deberíamos agilizar no sólo nuestras mentes sino también el trámite que le estamos dando a este proyecto que desde hace mucho tiempo viene siendo postergado.

Desde el mes de agosto las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General vienen trabajando intensamente en esta norma, habiendo sido visitadas por toda la sociedad trasplantológica, que nos ha pedido encarecidamente que no incluyéramos a los donantes vivos no relacionados porque ello posibilitaría la comercialización de órganos.

Por todos los medios intentamos incluir en la norma la posibilidad de dar vida a gente que hoy no la tiene y que se asiste con esa famosa bolsa de orina, entre otras cosas, y que es nada más y nada menos que la presunción de donación y el sentido de solidaridad que podemos llegar a tener legislado claramente.

Desde ningún punto de vista estamos proponiendo...

Sr. Echevarría. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada con el permiso de la Presidencia?

Sra. Camaño. — No, señor diputado, ya concluyo.

No estamos proponiendo una norma para que los médicos salgan a matar a nadie; ellos no están formados para la muerte sino para la vida. No estamos proponiendo una iniciativa para armar bandas de médicos que descuarticen a la gente: estamos proponiendo una norma para solucionar el problema que tienen miles de argentinos que sobrellevan una sobrevida pésima. Esto es lo que queremos proponer: una norma que impida el comercio y posibilite que esa solidaridad que tanto pregonamos se extienda a través de la muerte; es una norma que dice que el cadáver enterrado no sirve para nada y que los órganos sí pueden servir para dar soluciones a la gente que queda viva.

Reitero lo que dije en un principio: lamento mucho que estamos estancados en el tratamiento del capítulo que se refiere a los donantes cadavéricos y no en el relativo a los donantes vivos.

Señor presidente: habida cuenta de lo que está sucediendo en esta sesión le solicito que en uso de sus facultades reglamentarias invite al cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, oportunidad en la que continuaríamos con el tratamiento de este proyecto.

Sr. Presidente (Brook). — Señores diputados: advirtiendo la imposibilidad de reunir quórum y la necesidad de destrabar el debate sobre la iniciativa en consideración, en uso de las facultades que el artículo 157 del reglamento otorga a la Presidencia, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 3.

FULVIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.